**RESOLUCIÓN DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA**

En la Ciudad de México, a las 11:00 horas del 24 de mayo de 2023, reunidos en el aula número 2 del 4° piso ala norte del edificio sede de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, con fundamento en los artículos 65, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y; 17, 25 y 34, de los Lineamientos de Actuación del Comité de Transparencia, y conforme a la convocatoria realizada el pasado 19 de mayo de 2023, para celebrar la Vigésima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, el Secretario Técnico verificó la asistencia, de los siguientes integrantes del Comité:

**1. Grethel Alejandra Pilgram Santos**

Directora General de Transparencia y Gobierno Abierto y Suplente del Presidente del Comité de Transparencia. En términos de los artículos 64, párrafos tercero y cuarto, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 23, fracción V y último párrafo, 24, fracciones VIII y XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y; 5, párrafo tercero, de los Lineamientos de actuación del Comité de Transparencia.

**2.  Mtra. María de la Luz Padilla Díaz**

Directora General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Responsable del Área Coordinadora de Archivos. En términos de los artículos 64, párrafos tercero y cuarto, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 18, fracciones IV y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y; 5, inciso a), de los Lineamientos de actuación del Comité de Transparencia.

**3. L.C. Carlos Carrera Guerrero**

Titular de Control Interno y Suplente de la persona Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública. En términos de los artículos 64, párrafos tercero y cuarto, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 87, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y; 5, párrafo tercero, de los Lineamientos de actuación del Comité de Transparencia.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario Técnico del Comité de Transparencia dio lectura al mismo, siendo aprobado por unanimidad:

**I. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día**

**II. Análisis de las solicitudes de acceso a la información**

**A. Respuesta a solicitudes de acceso a la información en las que se analizará la clasificación de reserva**

1. Folio 330026523001787
2. Folio 330026523001788
3. Folio 330026523001892
4. Folio 330026523001977

**B. Respuesta a solicitudes de acceso a la información en las que se analizará la clasificación de confidencialidad**

1. Folio 330026523001790
2. Folio 330026523001791
3. Folio 330026523001792
4. Folio 330026523001793
5. Folio 330026523001794
6. Folio 330026523001795
7. Folio 330026523001824
8. Folio 330026523001832
9. Folio 330026523001835
10. Folio 330026523001838
11. Folio 330026523001851
12. Folio 330026523001859
13. Folio 330026523001860
14. Folio 330026523001888
15. Folio 330026523001929
16. Folio 330026523001942
17. Folio 330026523001946
18. Folio 330026523001972
19. Folio 330026523001980
20. Folio 330026523001991
21. Folio 330026523002001
22. Folio 330026523002031

**C. Respuesta a solicitudes de acceso a la información en las que se analizará la versión pública**

* + - 1. Folio 330026523001590
      2. Folio 330026523001789
      3. Folio 330026523001799
      4. Folio 330026523001912
      5. Folio 330026523001966
      6. Folio 330026523001970
      7. Folio 330026523002033
      8. Folio 330026523002063

**III. Análisis de solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales**

* + - 1. Folio 330026523001520
      2. Folio 330026523001857
      3. Folio 330026523001939
      4. Folio 330026523002067

**IV. Cumplimiento a resoluciones del INAI**

1.     Folio 330026522003042   RRD 416/23

2. Folio 330026522003067  RRD 423/23

**V. Alcance a respuesta inicial derivado de un recurso de revisión del INAI**

1. Folio 330026522001586 RRA 5509/23

**VI. Solicitudes de acceso a la información en las que se analizará el término legal de ampliación de plazo para dar respuesta**

* + - 1. Folio 330026523001923
      2. Folio 330026523001950
      3. Folio 330026523001979
      4. Folio 330026523002009
      5. Folio 330026523002010
      6. Folio 330026523002011
      7. Folio 330026523002019
      8. Folio 330026523002021
      9. Folio 330026523002034
      10. Folio 330026523002035
      11. Folio 330026523002036
      12. Folio 330026523002038
      13. Folio 330026523002055
      14. Folio 330026523002057
      15. Folio 330026523002058
      16. Folio 330026523002060
      17. Folio 330026523002066
      18. Folio 330026523002068
      19. Folio 330026523002072
      20. Folio 330026523002078
      21. Folio 330026523002089
      22. Folio 330026523002116
      23. Folio 330026523002119

**VII. Análisis de versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**

**A.  Artículo 70, fracción XXXVI de la LGTAIP**

A.1 Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (OIC-COFAA-IPN) VP 001623

**VIII. Asuntos Generales**

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

En desahogo del segundo punto del orden del día, se analizaron las respuestas a solicitudes de acceso a la información, que se sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del Comité de Transparencia, por parte de las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública, como aparecen en el orden del día, y que para ello tomaron nota a efecto de emitir las resoluciones siguientes.

**A. Respuestas a solicitudes de acceso a la información en las que se analizará la clasificación de reserva**

**A.1 Folio 330026523001787**

Un particular requirió:

*"Respecto a la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez Investigados, nombres, cargos, denuncias, investigaciones, responsables, Nombre de las victimas, auditorías, oficios girados por el secretario de la función pública para atender este tema, oficios del oic del instituto nacional de migración que tenga relación con los hechos, intervención del órgano interno de control para sancionar al […] por no hacer nada, sanción al titular del […] por no hacer nada, instrucciones del presidente a la función pública para atender el tema”. (Sic)*

El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración (OIC-INAMI) indicó de los hechos que se indican en la solicitud localizó los expedientes 2023/INM/DE337 y 2023/INM/DE340 mismos que se encuentran en etapa de investigación.

En este sentido, solicitó al Comité de Transparencia confirmar la clasificación de reserva de las constancias que integran los expedientes en términos de lo dispuesto en el artículo 110, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el periodo de 5 años.

Por su parte, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Función Pública (OIC-SFP) informó que el pronunciamiento constituye información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

En consecuencia, se emiten las siguientes resoluciones por unanimidad:

**II.A.1.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-SFP en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

**II.A.1.2.ORD.20.23: MODIFICAR** la respuesta emitida por el OIC-INAMI e instruir a efecto de que de manera fundada y motivada solicite la clasificación de reserva de los expedientes 2023/INM/DE337 y 2023/INM/DE340 en términos de lo dispuesto en el artículo 110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública acreditando lo dispuesto en el artículo 104, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los supuestos del numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

**II.A.1.3.ORD.20.23: MODIFICAR** la respuesta emitida por el OIC-INAMI e instruir a efecto de que, de manera fundada y motivada indique las razones por las cuales solicita la clasificación de reserva por el periodo de 5 años, lo anterior considerando que el numeral Vigésimo de los Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias prevé que la etapa de investigación no podrá exceder de 120 días contados a partir del día en que se haya emitido el acuerdo de radicación de la queja o denuncia, no obstante, cuando por la naturaleza o complejidad del asunto no sea posible concluir con las investigaciones en el plazo señalado, se podrá prorrogar la etapa de investigación hasta por un periodo igual.

La instrucción deberá de cumplimentarse a más tardar el día siguiente hábil a la notificación de la presente resolución.

**A.2 Folio 330026523001788**

Un particular requirió:

*"Investigaciones y sanciones que emitió la función pública contra el titular del órgano interno de control de […] por hacerse de la vista gorda y ayudar en el desfalco millonario, o cualquier falta que sea responsable.*

*También la investigación contra el titular del oic de la […] porque no ha sido omiso en sancionar al titular del oic, lo mismo pra los que resulten responsables*

*Nombre de todos los investigados por el caso Segalmex DICONSA y liconsa por parte de la función pública, acciones que se tomarán para parar esta malversación de fondos, denuncias penales que presentaron ante la auditoría, copia digital de todo,*

*[….] todo es público […] denuncias, investigaciones sanciones, en todos los oic, áreas de auditorias, quejas, todos”. (Sic)*

La Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC), Órgano Interno de Control en Seguridad Alimentaria Mexicana (OIC-SEGALMEX), Órgano Interno de Control en Diconsa S.A de C.V., (OIC-DICONSA), el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Función Pública (OIC-SFP), la Dirección General de Denuncias e Investigaciones (DGDI) y la Dirección General de Investigación Forense (DGIF) informaron que el pronunciamiento constituye información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

El OIC-LICONSA S.A. de C.V., proporcionó el resultado de la búsqueda respecto a la situación jurídica de las personas identificadas en la solicitud.

Además, el OIC-SEGALMEX indicó que en relación a *“Nombre de todos los investigados por el caso Segalmex DICONSA y liconsa por parte de la función pública, acciones que se tomarán para parar esta malversación de fondos, denuncias penales que presentaron ante la auditoría, copia digital de todo, […]”* localizó 14 expedientes de investigación aperturados por presuntas faltas administrativas, por lo que, las constancias que forman parte de los mismos constituyen información reservada en términos de lo dispuesto 110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el periodo de 1 año.

Por otro lado, indicó que localizó 3 expedientes que se encuentran en substanciación en el Área de Responsabilidades, por lo que, la información requerida actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 110, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el periodo de 1 año.

Por su parte, el OIC-DICONSA S.A de C.V. indicó que localizó 4 expedientes de investigación aperturados por presuntas faltas administrativas, por lo que la información requerida actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el periodo de 1 año.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.A.2.1.ORD.20.23 CONFIRMAR** la clasificación de reserva invocada por OIC-SEGALMEX respecto de 14 expedientes de investigación 2022/SEGALMEX/DE40; 2022/SEGALMEX/DE41; 2022/SEGALMEX/DE42; 2022/SEGALMEX/DE44; 2022/SEGALMEX/DE75; 2022/SEGALMEX/DE82; 2022/SEGALMEX/DE97; 2022/SEGALMEX/DE107; 2022/SEGALMEX/DE132; 2022/SEGALMEX/DE163; 2023/SEGALMEX/DE6; 2023/SEGALMEX/DE27; 2023/SEGALMEX/DE32; y 2023/SEGALMEX/DE64, con fundamento en los artículos 104 y 110, fracción VI, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y; Vigésimo Cuarto de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, por el periodo de 1 año.

En términos de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se emite la siguiente prueba de daño:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público: Toda vez que la autoridad investigadora se encuentra tramitando procedimientos de investigación, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de presuntos actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa, lo cual representa un riesgo a la sana conducción de los procedimientos referidos, así como a la secrecía de la investigación, ya que su divulgación podría ocasionar injerencias externas que vulneren la objetividad de la investigación de análisis de la autoridad investigadora, ya que de conformidad con el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la etapa de investigación concluye con la emisión del Acuerdo de Calificación de Faltas Administrativas o en caso de no encontrar elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta falta administrativa se emitirá un Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente, por lo que, las diligencias de investigación en los referidos procedimientos no son públicas hasta en tanto no se haya emitido acuerdo de conclusión; esto, con la finalidad de que en el procedimiento no se genere un menoscabo en la investigación por presuntos actos u omisiones constitutivas de faltas administrativas.

Robustece este argumento, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, que dice: “si un expediente es clasificado como reservado, ello es suficiente para que sea totalmente protegido hasta que se dicte resolución terminal, sin que proceda, durante ese periodo, emitir una versión pública de aquél […] por estar en el supuesto de la institución denominada ‘secreto de sumario’.” (Décima época, 2012903, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, octubre de 2016, tomo IV, materia(s): administrativa, tesis: I.1o.A.E.177 A (10a.), página: 3011).

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda: Los procedimientos de investigación por presuntos actos u omisiones constitutivos de faltas administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se encuentra dentro de las hipótesis normativas señaladas, buscan salvaguardar los principios constitucionales del servicio público, esto es, la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

En ese sentido, resulta de orden público que los servidores públicos que incumplan con los principios constitucionales sean sancionados, puesto que es la sociedad en general quien resulta afectada por el incumplimiento de un servicio público de calidad, luego entonces, difundir la información representa un riesgo de perjuicio mayor al beneficio de la difusión, toda vez que se podrían afectar la debida conducción del procedimiento investigación por presuntos actos u omisiones constitutivos de responsabilidad administrativa, y por ende, de modo que se perjudique el ejercicio de las facultades disciplinarias de la Secretaría de la Función Pública y de los Órganos de Control que permita derivar en fincar responsabilidades administrativas a las personas servidoras públicas relacionadas con los hechos irregulares, hasta en tanto los procedimientos y sus respectivos trámites queden definitivamente concluidos.

III. Lalimitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio: El proteger la información clasificada como reservada se adecúa al principio de proporcionalidad, ya que se justifica negar su divulgación por el riesgo a vulnerar el interés público antes descrito, al verse afectada la conducción del expediente y la libre deliberación de la autoridad investigadora, por un tiempo determinado, en tanto exista una determinación que concluya el procedimiento de investigación por presuntos actos u omisiones constitutivos de responsabilidad administrativa.

Asimismo, se actualizan los supuestos establecidos en el lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en términos de lo siguiente:

I. La existencia de un procedimiento de auditoría relativo al cumplimiento de las leyes: Este requisito se acredita en virtud de la existencia de los 14 expedientes de INVESTIGACIÓN en el Órgano Interno de Control en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).

II. Que el procedimiento se encuentre en trámite: De conformidad con lo dispuesto en el numeral Vigésimo Quinto de los Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de abril de 2016, la investigación es el procedimiento en el que las autoridades investigadoras llevan a cabo la práctica de diversas diligencias y actos con el objetivo de allegarse de los elementos necesarios para la acreditación de las conductas irregulares.

Por otra parte, en el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece que la etapa de investigación concluye con la emisión del Acuerdo de Calificación de Faltas Administrativas o en caso de no encontrar elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta falta administrativa se emitirá un Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.

Por lo que, se considera que, al hacer públicos los 14 expediente que se encuentran en investigación, podrían afectar el principio de presunción de inocencia del que gozan todas las personas, sin importar la calidad que tengan en su persona, es decir, que se hace extensivo este principio a los servidores públicos, lo anterior toda vez que no existe una resolución firme que los determine como responsables; asimismo, al otorgar la información solicitada, podrían obstaculizar los procedimientos de investigación que se encuentran realizando el área investigadora, cuyo objetivo es, allegarse de los elementos suficientes para determinar la existencia o no de una presunta falta administrativa.

En el caso en concreto, existen 14 expedientes de INVESTIGACIÓN en el Órgano Interno de Control en Seguridad

Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).

III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento: Este requisito se acredita en virtud de que las atribuciones reglamentarias con las que cuenta el Órgano Interno de Control en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) permite la investigación de actos u omisiones constitutivas de responsabilidad administrativa, con el objeto de examinar las operaciones cualquiera que sea su naturaleza de acuerdo con las atribuciones conferidas a ese Órgano Interno de Control; así como determinar el apego a la normatividad y comprobar si en el desarrollo de las actividades se cumplió con las disposiciones aplicables y se observaron los principios que rigen al servicio público, y en su caso pueda determinarse si, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, existen faltas administrativas imputables a servidores públicos.

IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento: Este requisito se acredita en virtud de que, como ya se precisó, debe guardarse sigilo respecto de la información recabada en el procedimiento de investigación, hasta en tanto se tenga el conocimiento veraz de los hechos que podrían o no, constituir irregularidades administrativas, lo que ocasionaría un daño irreparable a la función de fiscalización y con ello, la independencia y discrecionalidad de la autoridad fiscalizadora ante la hipótesis en comento.

De lo anterior, se desprende que este Comité de Transparencia tomando en cuenta la prueba de daño realizada, en términos de lo establecido en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determina que el plazo de reserva debe ser de un año, la cual podrá modificarse en caso variación en las circunstancias que llevaron a establecer.

**II.A.2.2.ORD.20.23 CONFIRMAR** la clasificación de reserva invocada por el OIC–DICONSA S.A de C.V., respecto de 4 expedientes de investigación 2022/DICONSA/DE79, 2022/DICONSA/DE81, 2022/DICONSA/DE97 y 2022/DICONSA/DE142, con fundamento en los artículos 104 y 110, fracción VI, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y; Vigésimo Cuarto de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, por el periodo de 1 año.

En términos de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se emite la siguiente prueba de daño:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público: Toda vez que la autoridad investigadora se encuentra tramitando procedimientos de investigación, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de presuntos actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa, lo cual representa un riesgo a la sana conducción de los procedimientos referidos, así como a la secrecía de la investigación, ya que su divulgación podría ocasionar injerencias externas que vulneren la objetividad de la investigación de análisis de la autoridad investigadora, ya que de conformidad con el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la etapa de investigación concluye con la emisión del Acuerdo de Calificación de Faltas Administrativas o en caso de no encontrar elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta falta administrativa se emitirá un Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente, por lo que, las diligencias de investigación en los referidos procedimientos no son públicas hasta en tanto no se haya emitido acuerdo de conclusión; esto, con la finalidad de que en el procedimiento no se genere un menoscabo en la investigación por presuntos actos u omisiones constitutivas de faltas administrativas.

Robustece este argumento, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, que dice: “si un expediente es clasificado como reservado, ello es suficiente para que sea totalmente protegido hasta que se dicte resolución terminal, sin que proceda, durante ese periodo, emitir una versión pública de aquél […] por estar en el supuesto de la institución denominada ‘secreto de sumario’.” (Décima época, 2012903, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, octubre de 2016, tomo IV, materia(s): administrativa, tesis: I.1o.A.E.177 A (10a.), página: 3011).

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda: Los procedimientos de investigación por presuntos actos u omisiones constitutivos de faltas administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se encuentra dentro de las hipótesis normativas señaladas, buscan salvaguardar los principios constitucionales del servicio público, esto es, la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

En ese sentido, resulta de orden público que los servidores públicos que incumplan con los principios constitucionales sean sancionados, puesto que es la sociedad en general quien resulta afectada por el incumplimiento de un servicio público de calidad, luego entonces, difundir la información representa un riesgo de perjuicio mayor al beneficio de la difusión, toda vez que se podrían afectar la debida conducción del procedimiento investigación por presuntos actos u omisiones constitutivos de responsabilidad administrativa, y por ende, de modo que se perjudique el ejercicio de las facultades disciplinarias de la Secretaría de la Función Pública y de los Órganos de Control que permita derivar en el fincamiento de responsabilidades administrativas a las personas servidoras públicas relacionadas con los hechos irregulares, hasta en tanto los procedimientos y sus respectivos trámites queden definitivamente concluidos.

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio:El proteger la información clasificada como reservada se adecúa al principio de proporcionalidad, ya que se justifica negar su divulgación por el riesgo a vulnerar el interés público antes descrito, al verse afectada la conducción del expediente y la libre deliberación de la autoridad investigadora, por un tiempo determinado, en tanto exista una determinación que concluya el procedimiento de investigación por presuntos actos u omisiones constitutivos de responsabilidad administrativa.

A continuación, se acreditan los supuestos del Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en términos de lo siguiente:

I. La existencia de un procedimiento de auditoría relativo al cumplimiento de las leyes:Este requisito se acredita en virtud de la existencia de los 4 expedientes de INVESTIGACIÓN en el Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en Diconsa, S.A. de C.V.

II. Que el procedimiento se encuentre en trámite:De conformidad con lo dispuesto en el numeral Vigésimo Quinto de los Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de abril de 2016, la investigación es el procedimiento en el que las autoridades investigadoras llevan a cabo la práctica de diversas diligencias y actos con el objetivo de allegarse de los elementos necesarios para la acreditación de las conductas irregulares.

En el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece que la etapa de investigación concluye con la emisión del Acuerdo de Calificación de Faltas Administrativas o en caso de no encontrar elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta falta administrativa se emitirá un Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente.

Por lo que, se considera que, al hacer públicos los 4 expediente que se encuentran en investigación, podrían afectar el principio de presunción de inocencia del que gozan todas las personas, sin importar la calidad que tengan en su persona, es decir, que se hace extensivo este principio a los servidores públicos, lo anterior toda vez que no existe una resolución firme que los determine como responsables; asimismo, al otorgar la información solicitada, podrían obstaculizar los procedimientos de investigación que se encuentran realizando el área investigadora, cuyo objetivo es, allegarse de los elementos suficientes para determinar la existencia o no de una presunta falta administrativa.

En el caso en concreto, existen 4 expedientes de INVESTIGACIÓN en el Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en Diconsa, S.A. de C.V.

III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento:Este requisito se acredita en virtud de que las atribuciones reglamentarias con las que cuenta el Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en Diconsa, S.A. de C.V. permite la investigación de actos u omisiones constitutivas de responsabilidad administrativa, con el objeto de examinar las operaciones cualquiera que sea su naturaleza de acuerdo con las atribuciones conferidas a ese Órgano Interno de Control; así como determinar el apego a la normatividad y comprobar si en el desarrollo de las actividades se cumplió con las disposiciones aplicables y se observaron los principios que rigen al servicio público, y en su caso pueda determinarse si, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, existen faltas administrativas imputables a servidores públicos.

IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento:Este requisito se acredita en virtud de que, como ya se precisó, debe guardarse sigilo respecto de la información recabada en el procedimiento de investigación, hasta en tanto se tenga el conocimiento veraz de los hechos que podrían o no, constituir irregularidades administrativas, lo que ocasionaría un daño irreparable a la función de fiscalización y con ello, la independencia y discrecionalidad de la autoridad fiscalizadora ante la hipótesis en comento.

De lo anterior, se desprende que este Comité de Transparencia tomando en cuenta la prueba de daño realizada, en términos de lo establecido en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determina que el plazo de reserva debe ser de 1 año, la cual podrá modificarse en caso variación en las circunstancias que llevaron a establecer.

**II.A.2.3.ORD.20.23 CONFIRMAR** la clasificación de reserva invocada por el OIC-SEGALMEX respecto de los expedientes P.A. 01/2022, P.A. 03/2022 y P.A. 01/2023, con fundamento en el artículo 110, fracción IX de la Ley Federal de la materia, únicamente por el periodode 1 año.

En términos de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se emite la siguiente prueba de daño:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público:Toda vez que la autoridad se encuentra tramitando un procedimiento de responsabilidad administrativa, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa, representa un riesgo a la sana conducción del procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, ya que su divulgación podría ocasionar injerencias externas que vulneren la objetividad de análisis de la autoridad resolutora.

También, otro perjuicio es que se violentaría el secreto de sumario, consistente en el deber de secrecía que supone que las diligencias practicadas en un procedimiento no sean públicas hasta en tanto no se haya dictado una resolución terminal y no pueda ser modificada posteriormente por otra instancia u autoridad.

Esto, con la finalidad de que en el procedimiento no se genere un menoscabo a las partes hasta en tanto no exista una resolución firme.

Robustece este argumento, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, que dice: “si un expediente es clasificado como reservado, ello es suficiente para que sea totalmente protegido hasta que se dicte resolución terminal, sin que proceda, durante ese periodo, emitir una versión pública de aquél […] por estar en el supuesto de la institución denominada ‘secreto de sumario’.” (Décima época, 2012903, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, octubre de 2016, tomo IV, materia(s): administrativa, tesis: I.1o.A.E.177 A (10a.), página: 3011).

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda:La responsabilidad administrativa sancionatoria busca salvaguardar los principios constitucionales del servicio público, esto es, la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

En ese sentido, resulta de orden público que los servidores públicos que incumplan con los principios constitucionales sean sancionados, puesto que es la sociedad en general quien resulta afectada por el incumplimiento de un servicio público de calidad, luego entonces, difundir la información representa un riesgo de perjuicio mayor al beneficio de la difusión, toda vez que se podrían afectar la debida conducción del procedimiento de responsabilidad administrativa, y por ende, de modo que se perjudique el ejercicio de las facultades disciplinarias de la Secretaría de la Función Pública y de los Órganos de Control que permita derivar en el fincamiento de responsabilidades administrativas a las personas servidoras públicas relacionadas con los hechos irregulares, hasta en tanto los procedimientos y sus respectivos trámites queden definitivamente concluidos.

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio: El proteger la información clasificada como reservada se adecúa al principio de proporcionalidad, ya que se justifica negar su divulgación por el riesgo a vulnerar el interés público antes descrito, al verse afectada la conducción del expediente y la libre deliberación de la autoridad resolutora, por un tiempo determinado, en tanto exista una determinación firme que concluya el procedimiento de responsabilidad administrativa.

En ese orden de ideas, con el fin de verificar la actualización del supuesto de reserva invocado, procede corroborar la acreditación de los elementos citados:

Este Comité tiene presente que el derecho administrativo sancionador es parte del ius puniendi del Estado, lo cual es ampliamente aceptado por la doctrina especializada. Esta postura descansa en la idea de que el derecho penal y el derecho administrativo sancionador constituyen dos manifestaciones de esa potestad punitiva estatal. En consecuencia, existe una cierta relación de dependencia entre ambas manifestaciones, toda vez que es el derecho administrativo el que ha incorporado a sus procedimientos sancionadores los principios y garantías que rigen en materia penal. En esta línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido de manera reiterada que los principios que rigen la materia penal deben aplicarse a los procedimientos administrativos sancionadores en la medida en que sean compatibles con estos.

Al respecto, véase “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO” la Tesis: P./J. 99/2006, Registro IUS: 174488, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1565. “NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR” Tesis: 2a./J. 124/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, pág. 897, Jurisprudencia (Administrativa). “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.CONCEPTO DE SANCIÓN QUE DA LUGAR A SU APLICACIÓN” Tesis: 1a. XXXV/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, pág. 441, Tesis Aislada, (Administrativa).

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, ha considerado que es admisible que en ciertos casos exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal, para garantizar la eficacia de la administración de justicia. Pues asiste al Estado la potestad de adoptar las medidas necesarias para impedir que la búsqueda de la verdad de los hechos de un expediente se vea afectada por la destrucción o el ocultamiento de pruebas.

El mismo efecto nocivo en los procesos penales resulta replicable en los procedimientos administrativos sancionadores, pues la divulgación de la información solicitada conllevaría un riesgo real, demostrable e identificable por cuanto a la sana e imparcial integración de los procedimientos administrativos, desde su apertura hasta su total solución, en el entendido de que, en principio, en ese lapso, las constancias que nutren su conformación sólo atañen a las partes que en él intervienen, por lo que se debe velar siempre por el correcto equilibrio del proceso, evitando cualquier injerencia externa que por mínima que sea suponga una alteración a ese esquema y a la objetividad.

En ese sentido, existen razones objetivas por las que la apertura de la información vulnera no solo la conducción del procedimiento administrativo de responsabilidad, sino además ocasionar un daño en el servidor público presunto responsable, al afectar sus derechos fundamentales relativos a la dignidad, honor y buen nombre que tienen las personas independientemente de cuál sea su profesión y oficio. A juicio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, percibe el concepto de honor como la interpretación que tenga una persona de sí misma o que la sociedad se ha formado de ella, Este derecho tiene dos elementos, el subjetivo y el negativo. En el aspecto objetivo, el derecho se lesiona por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros, Lo anterior a través de la Jurisprudencia 1a. / J. 118/2013 (10 a.), de rubro “DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR, SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA”.

Por otro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que debe garantizarse como derecho fundamental, el principio de presunción de inocencia a toda persona servidora pública sujeta a algún procedimiento de responsabilidad administrativa, cuyo resultado pudiera derivar en alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado; lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 200/2013, la jurisprudencia P. /J. 43/2014 (10a.), de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES”.

Respecto del primer requisito, relativo a la existencia de un procedimiento de responsabilidad en trámite, debe precisarse que, de conformidad con las fracciones I y II del artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos Internos de control, da inicio con la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad emitido por la Autoridad Investigadora; informe en el cual de conformidad con la fracción VII del artículo 194 del mismo ordenamiento, se exhiben las pruebas que obran en poder de la Autoridad Investigadora.

En relación a que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad y que con su difusión se pueda llegar a interrumpir o menoscabar la actuación de las autoridades administrativas que impida u obstaculice su determinación en el procedimiento de responsabilidadse informa que se cuenta con 3 procedimientos de responsabilidad administrativa en los cuales aún no se ha determinado una sanción firme es decir aún no se emite la resolución que lo resuelva, en definitiva, por lo que la información solicitada se refiere a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad**,** la cual derivó de la etapa de investigación, por lo que no se puede permitir el acceso, ya que como lo determinó la Corte interamericana de Derechos Humanos, es obligación adoptar las medidas necesarias para impedir que la búsqueda de la verdad de los hechos de un expediente se vea afectada.

Al respecto, el artículo 3, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, define al expediente como la unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados.

En consecuencia, toda vez que se advierte que la información solicitada actualiza el supuesto de reserva previsto en el artículo 110, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es menester proceder a la aplicación de la prueba de daño prevista en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

De lo anterior, se desprende que este Comité de Transparencia tomando en cuenta la prueba de daño realizada, en términos de lo establecido en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determina que el plazo de reserva debe serde1 año, la cual podrá modificarse en caso variación en las circunstancias que llevaron a establecer.

**II.A.2.4.ORD.20.23 CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por la CGOVC, el OIC-SFP, DGDI y la DGIF en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

**II.A.2.5.ORD.20.23 MODIFICAR** la respuesta emitida por el OIC-LICONSA S.A. de C.V. e instruir a efecto de que emita un pronunciamiento respecto de los procedimientos en los que se haya emitido una sanción por falta administrativa grave o no grave que se encuentre firme.

1. De localizar sanciones en contra de las personas físicas señaladas en la solicitud, deberá remitir la expresión documental que dé cuenta de ello.

De contener información confidencial o reservada de conformidad con los artículos 110 y 113, de la Ley Federal de la materia, deberá elaborar las versiones públicas correspondientes, clasificando la misma conforme al procedimiento establecido en la referida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

1. De no localizar deberá informarlo a la Unidad de Transparencia y solicitar de manera fundada y motiva la clasificación de confidencialidad en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

La instrucción deberá de cumplimentarse en un plazo máximo de un día hábil, contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya notificado.

**A.3 Folio 330026523001892**

Un particular requirió:

*“En relación con los expedientes con números INAI.3S.07.01.004/2020 y INAI.3S.07.01.005/2020, solicito amablemente a la Unidad de Transparencia y particularmente a su Órgano Interno de Control se me entregue copia de los documentos públicos donde conste:*

*1. Nombre y cargo de las personas servidoras públicas responsables de la vulneración de seguridad sucedida en los sistemas informáticos de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los expedientes del INAI citados.*

*2. Las responsabilidades administrativas en que incurrieron las personas servidoras públicas por la vulneración de seguridad sucedida en los sistemas informáticos de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los expedientes del INAI citados.*

*3. Las medidas de apremio impuestas por el INAI por incumplimiento de las resoluciones INAI.3S.07.01.004/2020 y INAI.3S.07.01.005/2020.*

*4. Las medidas que en el ámbito de sus atribuciones determinó el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública en cumplimiento del resolutivo primero de la resolución INAI.3S.07.01.004/2020”. (Sic)*

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Función Pública (OIC-SFP) indicó que localizó se encontró 01 coincidencia relacionada con lo solicitado por el peticionario, consistente en el expediente número QD/0289/2020 y sus acumulados QD/0290/2020 y QD/0631/2020, mismo que se encuentra en trámite, por lo que, actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Vigésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por un periodo de 3 meses.

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público:La publicidad de los hechos que se investigan, así como de las diligencias ordenadas por la autoridad investigadora, mismas que son parte del expediente QD/0289/2020 y sus acumulados QD/0290/2020 y QD/0631/2020, podría ocasionar que el o los servidores públicos investigados conozcan las diligencias que se siguen, y cuyo fin es precisamente acreditar o no la conducta irregular que se le(s) imputa, en tanto que al difundir los hechos que la motivaron, así como cualquier diligencia que con motivo de ésta se realiza, ocasionaría que el o los servidores públicos investigados pudieran alterar o modificar el escenario y los hechos que se investigan, por lo que se anularía la oportunidad de allegarse de elementos objetivos, certeros y convincentes a los que se pretende llegar con la realización de la investigación y, con ello se cancelaría el bien jurídico a cargo de la autoridad investigadora, que se traduce en vigilar que el actuar de los servidores públicos sea en apego a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con lo que se acredita el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico público tutelado.

En ese sentido, se estima que el otorgar a cualquier tipo de información concerniente a las diligencias que formen parte del expediente de investigación, podría ocasionar un riesgo a la seguridad jurídica en la investigación de la denuncia, aunado a que se transgrediría el principio de presunción de inocencia que le asiste al o los investigados durante la sustanciación de los procedimientos de investigación, hasta en tanto no se dicte el acuerdo de que se trate por parte de esta Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto al artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda: El interés jurídico tutelado se considera en permitir que esta Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, como autoridad investigadora, se encuentre en condiciones de recabar y analizar las circunstancias de hecho en las que se desarrolla la investigación, es decir, se busca proteger todas y cada una de las indagatorias, averiguaciones, búsquedas e investigaciones que debe realizar como parte del trámite de la investigación del expediente QD/0289/2020 y sus acumulados QD/0290/2020 y QD/0631/2020.

Por lo anterior, otorgar acceso a la información que conste en el expediente de investigación multicitado puede ocasionar un daño al mismo, debido a que se podrían revelar las líneas de acción, investigación o las determinaciones a las que ha ido llegando la autoridad investigadora respecto del posible incumplimiento del marco legal, además de que puede existir el peligro de ocultamiento o tergiversación de elementos indispensables para la determinación a adoptar a través del acuerdo correspondiente, de permitirse el acceso a la información a terceros a conocer las acciones y líneas de investigación que contiene el procedimiento de investigación, máxime que, en términos del artículo 49, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se dispone que autoridad investigadora, debe guardar secrecía respecto de la información obtenida en la práctica de verificaciones, inspecciones e investigaciones, para el esclarecimiento de los hechos que puedan constituir faltas administrativas por parte de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, por lo que dar a conocer la información que ahora se reserva, contravendría dicha disposición general.

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio:En virtud de lo anteriormente expuesto, no resultaría posible realizar versión públicadel expediente QD/0289/2020 y sus acumulados QD/0290/2020 y QD/0631/2020, toda vez que aún se encuentran en trámite y no existe otro supuesto jurídico que permita el acceso a la información solicitada, siendo la reserva de la información el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, siendo proporcional el hecho de que, cuando esta autoridad investigadora resuelva la investigación en trámite, se extinguirán las causales de clasificación y se estaría en posibilidad de atender lo requerido por el peticionario, pues de lo contrario, se afectaría la verificación del cumplimiento de las leyes y se pondría en riesgo la viabilidad de la investigación, tomando en cuenta que al entregar la información significaría un detrimento a las actuaciones realizadas por la autoridad investigadora para determinar, en su caso, el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa.

Con el objeto de robustecer los razonamientos anteriormente vertidos, el Área de Quejas de este Órgano Fiscalizador estima pertinente evidenciar la acreditación de los requisitos que dispone en cumplimiento al Vigésimo cuarto de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,* lo que se realiza en los siguientes términos:

I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes:Este requisito se acredita en virtud de la existencia de las indagatorias que se encuentra realizando el Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública al Órgano Interno de Control, dentro del expediente QD/0289/2020 y sus acumulados QD/0290/2020 y QD/0631/2020.

II. Que el procedimiento se encuentre en trámite: El presente requisito se acredita con la existencia del propio proceso de investigación, el cual persigue un objetivo único, que es el de determinar, respecto de las conductas de los Servidores Públicos y de particulares, la constitución de responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia.

III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación e inspección del cumplimiento de las leyes: Este requisito se acredita en virtud de que las atribuciones reglamentarias con las que cuenta el Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública permite la tramitación de las denuncias que se formulen por la probable comisión de faltas administrativas derivadas de actos u omisiones de los servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y derivado de ello, el ordenamiento de la práctica de las investigaciones, actuaciones y demás diligencias que se requieran para determinar la presunta responsabilidad.

IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las actividades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes:Este requisito se acredita en virtud de que, como ya se precisó, debe guardarse sigilo respecto de la información recabada en el proceso de investigación, hasta en tanto se tenga el conocimiento veraz de los hechos que podrían o no, constituir irregularidades administrativas, toda vez que su publicación ocasionaría un daño irreparable a la función de investigación y con ello, a la independencia y discrecionalidad de la autoridad investigadora ante la hipótesis en comento.

Así, tomando en cuenta la prueba de daño realizada, en términos de lo establecido en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determina que el plazo de reserva debe ser de 3 meses, la cual podrá modificarse en caso variación en las circunstancias que llevaron a establecer.

**II.A.3.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de reserva invocada por el OIC-SFP respecto del expediente QD/0289/2020 y sus acumulados QD/0290/2020 y QD/0631/2020 en términos de lo dispuesto en el artículo 110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Vigésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por un periodo de 3 meses.

**A.4 Folio 330026523001977**

Un particular requirió:

*"De TODOS los Organo Interno de Control, requiero la relación de los servidores públicos que han ocupado y ocupan una plaza, que incluya nombre, puesto, datos de contacto como correo, teléfono dirección. Desde que Ley se establecieron los OIC? y desde esa fecha solicito la información del primer párrafo hasta abril del 2023". (Sic)*

La Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) informó que actualmente la información respecto de la estructura orgánica, nombre, cargo, correo electrónico institucional e información curricular del Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Inteligencia, del Órgano Interno de Control en la Guardia Nacional y del Órgano Interno de Control en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como la estructura orgánica, nombre, cargo, correo electrónico institucional, información curricular y domicilio del Titular del Órgano Interno de Control, Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del OIC-COFEPRIS, se encuentra reservada en términos del artículo 110, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el periodo de 5 años.

Por otro lado, informó que pone a disposición de la persona solicitante las plantillas de personal de los OIC, a partir de la fecha en que fueron transferidos a esta Secretaría (2019), así como las plantillas del personal del OIC de la SFP, partir del año 2017, cuando por Reglamento Interior obtuvo la denominación de Órgano Interno de Control.

En consecuencia, se emiten las siguientes resoluciones por unanimidad:

**II.A.4.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la subsistencia de las causales que dieron origen a la reserva invocada por la DGRH en la Trigésima Novena y Cuadragésima Tercera Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia del 2021 respecto de la estructura orgánica, nombre, cargo, correo electrónico institucional e información curricular del OIC-CNI lo anterior con fundamento en el artículo 110, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el periodo de 5 años.

En cumplimiento al artículo 104, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se aplica la siguiente prueba de daño:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional: Proporcionar los nombres de los servidores públicos del OIC-CNI, pone en riesgo de manera directa la vida y la seguridad de los servidores públicos de mérito, e incluso de sus familiares, ya que puede identificar a cada uno provocando afectaciones a las labores realizadas en la institución, pues la persona que conozca dicha información puede utilizarla para amenazar, intimidar o extorsionar al integrante, y en una sociedad prevalece el derecho absoluto a la vida y a la seguridad, ya que son supuestos para que pueda acceder a otros derechos.

Asimismo, dada la naturaleza de las funciones que realizan los servidores públicos del OIC-CNI, se pone en peligro la vida de los servidores públicos, toda vez que, su divulgación permitiría que puedan ser amenazados, intimidados o extorsionados a fin de que el personal les otorgue información privilegiada respecto a las operaciones que realiza el sujeto obligado, o sobre su forma de organización y con ellos anticiparse a las acciones que realizan.

Revelar los perfiles de puesto, información curricular, funciones y requisitos que se deben cumplir podría colocar en situación de vulnerabilidad la capacidad operativa y forma de organización a partir de las cuales el Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Inteligencia desarrolla sus tareas.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda: El riesgo de perder la vida, la seguridad o la integridad se encuentra presente y es de mayor gravedad que la divulgación de la información a través de cualquier registro o fuente pública oficial, ya que puede generar un daño desproporcionado o innecesario, lo cual, debe evitarse en la medida de lo posible. Es de interés público y socialmente relevante la protección a la vida y seguridad de todas y cada una de las personas sobre cualquier otro derecho fundamental, toda vez que, se podría atentar contra la integridad y seguridad de los servidores públicos relacionados con la información de mérito; además, propiciaría que grupos de la delincuencia organizada pudieran estar interesados en intentar algún tipo de acción en contra de estos.

Consecuentemente, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público de que se difunda la información solicitada, ya que permitiría identificar a las personas físicas que poseen datos estratégicos del Estado relativos a la seguridad nacional, aunado a que se pondría en riesgo su misión, su vida, su integridad y la de sus familiares.

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de Derechos Humanos, establecen que el derecho a la vida y a la seguridad personal son bienes supremos tutelados por los gobiernos, que no existe derecho alguno por encima de la vida y seguridad personal. El derecho de acceso a la información, tutelado por el artículo 6° de nuestra carta magna, no es absoluto *per se*, toda vez que su objetivo es facultar a las personas a tener acceso a la información que les permita conocer cómo funcionan los órganos de gobierno, como parte fundamental de todo Estado democrático; dicho derecho permite a las personas tener una participación activa en la toma de decisiones de los gobernantes y, a su vez, funciona como ejercicio de fiscalización para supervisar las actividades que realiza el Estado; sin embargo, dicha garantía tiene sus limitaciones que se encuentran plasmadas en la Tesis Aislada emitida por el Poder Judicial de rubro “DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS”, la cual, se tiene por reproducida como si a la letra se insertase.

Así, tomando en cuenta la preba de daño realizada, en términos de lo establecido en los artículos 99, párrafo segundo y 100, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determina que el plazo de reserva debe ser de 5 años, el cual, podrá modificarse en caso de variación en las circunstancias que llevaron a establecerlo.

**II.A.4.2.ORD.20.23: CONFIRMAR** la subsistencia de las causales que dieron origen a la reserva invocada por la DGRH en la Trigésima Novena y Cuadragésima Tercera Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia del 2021 respecto de la estructura orgánica, nombre, cargo, correo electrónico institucional e información curricular del OIC-GN, lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción V, de la Ley Federal de la materia, por el periodo de 5 años.

En cumplimiento al artículo 104, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se aplica la siguiente prueba de daño:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional:Proporcionar los nombres de los servidores públicos del OIC-GN, pone en riesgo de manera directa la vida y la seguridad de los servidores públicos de mérito, e incluso de sus familiares, ya que puede identificar a cada uno provocando afectaciones a las labores realizadas en la institución, pues la persona que conozca dicha información puede utilizarla para amenazar, intimidar o extorsionar al integrante, y en una sociedad prevalece el derecho absoluto a la vida y a la seguridad, ya que son supuestos para que pueda acceder a otros derechos.

Asimismo, dada la naturaleza de las funciones que realizan los servidores públicos del OIC-GN se pone en peligro la vida de los servidores públicos, toda vez que, su divulgación permitiría que puedan ser amenazados, intimidados o extorsionados a fin de que el personal les otorgue información privilegiada respecto a las operaciones que realiza el sujeto obligado, o sobre su forma de organización y con ellos anticiparse a las acciones que realizan.

Revelar los perfiles de puesto, información curricular, funciones y requisitos que se deben cumplir podría colocar en situación de vulnerabilidad la capacidad operativa y forma de organización a partir de las cuales el OIC-GN desarrolla sus tareas.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda: El riesgo de perder la vida, la seguridad o la integridad se encuentra presente y es de mayor gravedad que la divulgación de la información a través de cualquier registro o fuente pública oficial, ya que puede generar un daño desproporcionado o innecesario, lo cual, debe evitarse en la medida de lo posible. Es de interés público y socialmente relevante la protección a la vida y seguridad de todas y cada una de las personas sobre cualquier otro derecho fundamental.

Consecuentemente, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda la información, ya que permitiría identificar a las personas físicas que poseen datos estratégicos del Estado relativos a la seguridad nacional, aunado a que se pondría en riesgo su misión, su vida, su integridad y la de sus familias.

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos, establecen que el derecho a la vida y a la seguridad personal son bienes supremos tutelados por los gobiernos, eso quiere decir, que no existe derecho alguno por encima de la vida y seguridad personal. El derecho de acceso a la información, tutelado en el artículo 6° de nuestra Carta Magna, no es absoluto *per se*, toda vez que, su objeto es facultar a las personas a tener acceso a la información que les permita conocer cómo funcionan los órganos de gobierno, como parte fundamental de todo Estado democrático; dicho derecho permite a las personas tener una participación activa en la toma de decisiones de los gobernantes y, a su vez, funciona como ejercicio de fiscalización para supervisar las actividades que realiza el Estado; sin embargo, dicha garantía tiene, sus limitaciones que se encuentran plasmadas en la tesis aislada emitida por el Poder Judicial de rubro “DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS”, la cual, se tiene por reproducida como si a la letra insertase.

Así, tomando en cuenta la prueba de daño realizada, en términos de lo establecido en los artículos 99, párrafo segundo y 100, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se determina que el plazo de reserva debe ser de 5 años, el cual, podrá modificarse en caso de variación en las circunstancias que llevaron a establecerlo.

**II.A.4.3.ORD.20.23: CONFIRMAR** la subsistencia de las causales que dieron origen a la reserva invocada por la DGRH en la Trigésima Novena y Cuadragésima Tercera Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia del 2021 respecto de la estructura orgánica, nombre, cargo, correo electrónico institucional e información curricular del OIC-OADPRS, lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el periodo de 5 años.

En cumplimiento al artículo 104, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se aplica la siguiente prueba de daño:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional:Proporcionar los nombres de los servidores públicos del OIC-OADPRS pone en riesgo de manera directa la vida y la seguridad de los servidores públicos de mérito, e incluso de sus familiares, ya que puede identificar a cada uno provocando afectaciones a las labores realizadas en la institución, pues la persona que conozca dicha información puede utilizarla para amenazar, intimidar o extorsionar al integrante, y en una sociedad prevalece el derecho absoluto a la vida y a la seguridad, ya que son supuestos para que pueda acceder a otros derechos.

Asimismo, dada la naturaleza de las funciones que realizan los servidores públicos del OIC-OADPRS se pone en peligro la vida de los servidores públicos, toda vez, que su divulgación permitiría que puedan ser amenazados, intimidados o extorsionados a fin de que el personal les otorgue información privilegiada respecto a las operaciones que realiza el sujeto obligado, o sobre su forma de organización y con ellos anticiparse a las acciones que realizan.

Revelar los perfiles de puesto, información curricular, funciones y requisitos que se deben cumplir podría colocar en situación de vulnerabilidad la capacidad operativa y forma de organización a partir de las cuales el OIC-OADPRS desarrolla sus tareas.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda:El riesgo de perder la vida, la seguridad o la integridad se encuentra presente y es de mayor gravedad que la divulgación de la información a través de cualquier registro o fuente pública oficial, ya que puede generar un daño desproporcionado o innecesario, lo cual, debe evitarse en la medida de lo posible. Es de interés público y socialmente relevante la protección a la vida y seguridad de todas y cada una de las personas sobre cualquier otro derecho fundamental.

Consecuentemente, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda la información, ya que permitiría identificar a las personas físicas que poseen datos estratégicos del Estado relativos a la seguridad nacional, aunado a que se pondría en riesgo su misión, su vida, su integridad y la de sus familias.

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos, establecen que el derecho a la vida y a la seguridad personal son bienes supremos tutelados por los gobiernos, eso quiere decir, que no existe derecho alguno por encima de la vida y seguridad personal. El derecho de acceso a la información, tutelado en el artículo 6° de nuestra Carta Magna, no es absoluto *per se*, toda vez que, su objeto es facultar a las personas a tener acceso a la información que les permita conocer cómo funcionan los órganos de gobierno, como parte fundamental de todo Estado democrático; dicho derecho permite a las personas tener una participación activa en la toma de decisiones de los gobernantes y, a su vez, funciona como ejercicio de fiscalización para supervisar las actividades que realiza el Estado; sin embargo, dicha garantía tiene sus limitaciones que se encuentran plasmadas en la tesis aislada emitida por el Poder Judicial del rubro “DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS”, la cual, se tiene por reproducida como si a la letra insertase.

Así, tomando en cuenta la prueba de daño realizada, en términos de lo establecido en los artículos 99, párrafo segundo y 100, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se determina que el plazo de reserva debe ser de 5 años, el cual, podrá modificarse en caso de variación en las circunstancias que llevaron a establecerlo.

**II.A.4.4.ORD.20.23: CONFIRMAR** la subsistencia de las causales que dieron origen a la reserva invocada por la DGRH en la Trigésima Novena y Cuadragésima Tercera Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia del 2021 respecto de la estructura orgánica, nombre, cargo, correo electrónico institucional, información curricular y domicilio del Titular del Órgano Interno de Control, Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del OIC-COFEPRIS, lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el periodo de 5 años.

En cumplimiento al artículo 104, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se aplica la siguiente prueba de daño:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional: Difundir información relativa al personal  que   ocupa  los cargos  de   Titular   del   Órgano   Interno   de  Control ,  Titular   del   Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del OIC-COFEPRIS servidores públicos que pertenecen a la Secretaría de Marina Armada de México y desempeñan labores bajo la compatibilidad de empleos, implicaría que se ponga en riesgo de manera directa su vida y la seguridad de los mismos, ya que se les podría identificar, provocando afectaciones a las labores desempeñadas en ambas dependencias, por parte de personas o grupos delincuenciales que conozcan dicha información para amenazar, intimidar o atentar contra su vida a efecto de conseguir información relativa al desarrollo de sus funciones, obstaculizando el cumplimiento de las atribuciones, así como, los objetivos institucionales de la Secretaría de Marina Armada de México, institución militar  nacional  de  carácter permanente cuyas funciones son de seguridad nacional, actualizándose el riesgo real, demostrable e identificable al ser divulgada la citada información y ser conocida por personas o grupos delincuenciales y/o agentes externos.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda:  Al  atentar  contra  la  vida,  salud y la  integridad  física  de  los servidores públicos que actualmente ocupan los cargos de Titular del Órgano Interno de Control, Titular del Área de responsabilidades y Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del OIC-COFEPRIS conlleva a la afectación de las labores desempeñadas en el órgano fiscalizador, así como, los objetivos institucionales de la Secretaría de Marina Armada de México.

Consecuentemente, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público de que se difunda la información solicitada, ya que permitiría identificar a las personas físicas que poseen datos estratégicos del Estado relativos a la seguridad nacional, aunado a que se pondría en riesgo su misión, su vida, su integridad y la de sus familiares, toda vez que, ello vulneraría los derechos fundamentales de las personas afectadas y las atribuciones de las dependencias para las que prestan sus servicios, por lo que la citada divulgación supera el interés público general de que se difunda la información.

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio:  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos, establecen que el derecho a la vida y a la seguridad personal son bienes supremos tutelados por los gobiernos, eso quiere decir, que no existe derecho alguno por encima de la vida y seguridad personal. El derecho de acceso a la información, tutelado en el artículo 6° de nuestra Carta Magna, no es absoluto *per se*,  toda vez que, su objeto es facultar a las personas a tener acceso a la información que les permita conocer cómo funcionan los órganos de gobierno, como parte fundamental de todo Estado democrático; dicho derecho permite a las personas tener una participación activa en la toma de decisiones de los gobernantes y, a su vez, funciona como ejercicio de  fiscalización para  supervisar  las  actividades  que realiza el Estado; sin embargo, dicha garantía tiene sus limitaciones que se encuentran plasmadas en la tesis aislada emitida por el Poder Judicial de rubro “DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS”, la cual, se tiene por reproducida como si a la letra insertase.

Es importante precisar que, de conformidad al artículo 3, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el derecho de acceso a la información no es absoluto y admite excepciones, situación que acontece en el presente caso.

Toda vez que, la difusión de la información puede propiciar que personas o grupos delincuenciales y/o agentes externos se interesen en atentar contra la vida, salud o integridad de las personas que ocupan los cargos de Titular del Órgano Interno de Control, Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del OIC-COFEPRIS con el fin de obtener información relacionada con las actividades que desempeñan; consecuentemente, la reserva de la información cuyo fin es la protección de interés general o colectivo superior al interés individual, como lo es la seguridad nacional, se adecúa al principio de proporcionalidad, ya que su restricción es el único medio disponible para evitar atentar contra la vida, salud o integridad de las personas que ocupan los cargos en el órgano fiscalizador, así como, el cumplimiento de las atribuciones y objetivos institucionales de ambas dependencias.

Por lo que, proporcionar o hacer pública la información relativa a los datos personales, cargo, remuneraciones y diversa información de los servidores públicos que realizan actividades operativas de recolección de datos, constituye un factor de riesgo para la actualización de amenazas a la seguridad nacional, entre las que se incluyen los actos encaminados a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia a la seguridad nacional.

En razón de lo anterior, se actualizan las causas previstas por el artículo 110, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los que se establece que podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.

Asimismo, el artículo 6°, fracción V, de la Ley de Seguridad Nacional establece que los datos personales otorgados a una instancia por servidores públicos, así como los datos personales proporcionados al Estado Mexicano para determinar o prevenir una amenaza a la seguridad nacional es información gubernamental confidencial.

Así, tomando en cuenta la prueba de daño realizada, en términos de lo establecido en los artículos 99, párrafo segundo y 100, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se determina que el plazo de reserva debe ser de 5 años, el cual, podrá modificarse en caso de variación en las circunstancias que llevaron a establecerlo.

**II.A.4.5.ORD.20.23: MODIFICAR** la respuesta emitida por la DGRH e instruir a efecto de que:

1. Indique la modalidad en la que obra la información requerida por el particular.
2. Indique si es posible atender la modalidad de entrega de la información, es decir, electrónico a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

De existir un impedimento justificado para atender la modalidad elegida por la persona solicitante, deberá:

1. De manera fundada y motivada acreditar el impedimento para atender la modalidad elegida por la persona solicitante, exponiendo las razones por las cuales no es posible atenderla;
2. Notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades de entrega que permita el documento para que la persona solicitante pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más le convenga.

En caso de poner a disposición información en consulta directa, deberá de informar a la Unidad de Transparencia al menos lo siguiente:

1. Lugar, día y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación solicitada. En caso de que, derivado del volumen o de las particularidades de los documentos, la unidad administrativa determine que se requiere más de un día para realizar la consulta, en la respuesta a la solicitud también se deberá indicar esta situación y los días, y horarios en que podrá llevarse a cabo, esto es, calendarizar la consulta directa.

2. La ubicación precisa del lugar en que la persona solicitante podrá llevar a cabo la consulta de la información.

3. Nombre, cargo y datos de contacto del personal de la unidad administrativa que le permitirá el acceso.

4. Reglas a las que se sujetará la consulta directa para garantizar la integridad de los documentos.

5. Por cada expresión documental indicar si se ponen a disposición en versión íntegra o versión pública. De ser el caso, que se tenga que elaborar una versión pública remitir el Índice de Información Clasificada para que por conducto de la Unidad de Transparencia se someta a consideración del Comité de Transparencia la clasificación de información. Previo a la consulta directa, el Comité de Transparencia deberá emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones que podrán dejarse a la vista de la persona solicitante.

6.Medidas que el personal encargado de permitir la consulta directa de la unidad administrativa implementara al momento de llevar la consulta directa. Se deberá de informar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que resulten necesarias para garantizar la integridad de la información a consultar, de conformidad con las características específicas del documento solicitado.

La instrucción deberá de cumplimentarse en un plazo máximo de un día hábil, contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya notificado.

**B. Respuesta a solicitudes de acceso a la información en las que se analizará la clasificación de confidencialidad**

**B.1 Folio 330026523001790**

Un particular requirió:

*"[…] Y cuál va ser la sanción para el coordinador […] , lo va investigar también el TOIC de […] como a […]?”. (Sic)*

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Función Pública (OIC-SFP) informó que el pronunciamiento constituye información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-SFP en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

**B.2 Folio 330026523001791**

Un particular requirió:

*"Quejas denuncias investigaciones y sanciones contra el […] y el […] por ser omisos en el caso Segalmex, DICONSA y liconsa”. (Sic)*

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Función Pública (OIC-SFP) y el Órgano Interno de Control en Presidencia de la República (OIC-PR) informaron que el pronunciamiento constituye información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.2.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-SFP y el OIC-PR en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

**B.3 Folio 330026523001792**

Un particular requirió:

*“Solicito todos los registros de procedimientos -quejas y denuncias- iniciadas contra servidores públicos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) -así como de sus 32 delegaciones estatales durante el periodo 1 de enero del 2002 al 31 de marzo de 2023.*

*De lo anterior, solicito que sea desglosado por 1) Año 2) Nombre del servidor público 3) Cargo del servidor público 4) Motivo de la queja y/o denuncia 5) Resolución.*

*Solicito todos los registros de procedimientos y sanciones iniciadas contra servidores públicos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) -así como de sus 32 delegaciones estatales durante el periodo 1 de enero del 2002 al 31 de marzo de 2023..”* (Sic)

El Órgano Interno de Control en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (OIC-PROFEPA) remitió un listado que contiene la información inherente a las(os) servidoras(es) publicas(os), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que han sido sujetos a procedimiento administrativo y en su caso han sido sancionadas(os) por parte de este Órgano Interno de Control durante el periodo 2002 al 31 de marzo de 2023 desglosado por 1) Año, 2) Nombre del servidor público, 3) Cargo del servidor público, 4) Motivo de la queja y/o denuncia y 5) Resolución.

Ahora bien, revelar información sobre de la existencia o inexistencia de algún procedimiento administrativo, en la que no exista una resolución sancionatoria, o en caso de existir sanción esta no se encuentre firme sobre los servidores públicos que se enlistan en el archivo anexo, violaría el derecho de presunción de inocencia al que tiene derecho toda persona independientemente de sí es servidor público o no, de modo tal, que a través del ejercicio de otros derechos no se puede dañar a una persona en su honor o en la estimación y confianza que los demás tienen de ella en el medio social en que se desenvuelve y que es donde directamente repercute en su agravio.

Por lo anterior, resulta necesario considerar aplicable al caso, en los supuestos de procedimientos administrativos que no derivaron en una sanción, o en su caso esta última no se encuentra firme, que la información solicitada recae en lo dispuesto en el precepto normativo previsto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De ahí que, respecto a lo solicitado en el acceso de información que nos ocupa, al tratarse de un listado que incluye datos personales como es el nombre de los funcionarios públicos de la PROFEPA que hayan sido sometidos a algún proceso administrativo, hayan sido sancionados o no sancionados durante el periodo 1 de enero del 2002 al 31 de marzo de 2023, únicamente se proporciona el nombre de los servidores públicos con sanciones y que estas se encuentren firmes, de conformidad con la normatividad anteriormente invocada y al criterio FUNCIONPUBUCA/CT/02/2019, emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, en la Octava Sesión Ordinaria 2019 de fecha 26 de febrero de 2019.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

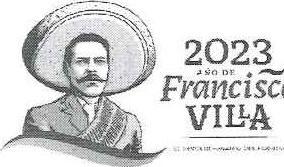
**II.B.3.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-PROFEPA, respecto al nombre y cargo de los servidores públicos denunciados, pero no sancionados, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**B.4 Folio 330026523001793**

Un particular requirió:

*“Solicito todos los registros de procedimientos -quejas y denuncias- iniciadas contra servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), durante el periodo 1 de enero del 2002 al 31 de marzo de 2023. De lo anterior, solicito que sea desglosado por 1) Año 2) Nombre del servidor público 3) Cargo del servidor público 4) Motivo de la queja y/o denuncia 5) Resolución.*

*Solicito todos los registros de procedimientos y sanciones iniciadas contra servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) durante el periodo 1 de enero del 2002 al 31 de marzo de 2023”. (Sic)*

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales (OIC-SEMARNAT) indicó que, el Área de Responsabilidades realizó una búsqueda exhaustiva efectuada en los archivos electrónicos y bases de datos así como en los Sistema de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (SPAR), Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS) y en el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas (SIRA), respecto a *"(...) Solicito todos los registros de procedimientos y sanciones iniciadas contra servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) durante el periodo 7 de enero del 2002 al 31 de marzo de 2023."* Al respecto, se anexa al presente, archivo electrónico en formato PDF, que contiene la información inherente a las(os) servidoras(es) públicas(os), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que han sido sujetos a procedimiento administrativo y en su caso han sido sancionadas(os) por parte de ese Órgano Interno de Control durante el periodo 2002 al 31 de marzo de 2023 desglosado por 1) Año, 2) Nombre del servidor público, 3) Cargo del servidor público, 4) Motivo de la queja y/o denuncia y 5) Resolución.

Ahora bien, revelar información sobre de la existencia o inexistencia de algún procedimiento administrativo, en la que no exista una resolución sancionatoria, o en caso de existir sanción esta no se encuentre firme sobre los servidores públicos que se enlistan en el archivo anexo, violaría el derecho de presunción de inocencia al que tiene derecho toda persona independientemente de sí es servidor público o no, de modo tal, que a través del ejercicio de otros derechos no se puede dañar a una persona en su honor o en la estimación y confianza que los demás tienen de ella en el medio social en que se desenvuelve y que es donde directamente repercute en su agravio.

Por lo anterior, resulta necesario considerar aplicable al caso, en los supuestos de procedimientos administrativos que no derivaron en una sanción, o en su caso esta última no se encuentra firme, que la información solicitada recae en lo dispuesto en el precepto normativo previsto en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De ahí que, respecto a lo solicitado en el acceso de información que nos ocupa, al tratarse de un listado que incluye datos personales como es el nombre de los funcionarios públicos de la SEMARNAT que hayan sido sometidos a algún proceso administrativo, hayan sido sancionados o no sancionados durante el periodo 2002 al 31 de marzo de 2023, únicamente se proporciona el nombre de los servidores públicos con sanciones y que estas se encuentren firmes, de conformidad con la normatividad anteriormente invocada y el criterio FUNCIONPUBLICA/CT/02/2019, emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, en la Octava Sesión Ordinaria 2019 de fecha 26 de febrero de 2019.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.4.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-SEMARNAT, respecto al nombre y cargo de los servidores públicos denunciados, pero no sancionados, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**B.5 Folio 330026523001794**

Un particular requirió:

*“Solicito todos los registros de procedimientos -quejas y denuncias- iniciadas contra servidores públicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), durante el periodo 1 de enero del 2002 al 31 de marzo de 2023. De lo anterior, solicito que sea desglosado por 1) Año 2) Nombre del servidor público 3) Cargo del servidor público 4) Motivo de la queja y/o denuncia 5) Resolución.*

*Solicito todos los registros de procedimientos y sanciones iniciadas contra servidores públicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) durante el periodo 1 de enero del 2002 al 31 de marzo de 2023”. (Sic)*

La Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) indicó que referente al desglose consistente en “*…1) Año 2) Nombre del servidor público 3) Cargo del servidor público 4) Motivo de la queja y/o denuncia 5) Resolución…” (Sic)*,la información se encuentra contenida en los expedientes que se pondrán a disposición del particular y los cuales constan de aproximadamente 39,000 hojas útiles en formato físico.

Documentos que deberán atenderse conforme a lo previsto en los artículos, 116 y 134 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Asimismo, en caso de así convenir al peticionario, se ponen a disposición en consulta directa en el domicilio del OIC (consultable en <https://www.gob.mx/sfp/documentos/directorio-de-los-organos-internos-de-control-y-unidades-de-responsabilidades>) de lunes a jueves en un horario de 10:00 a 13:00 horas.

Además es importante precisar que quedará prohibido sustraer, alterar, modificar, divulgar, ocultar, o inutilizar total o parcialmente la información que se ponga a disposición en consulta directa, asimismo, se informa que para el ingreso a las instalaciones será necesario que se registre y observe en todo momento las reglas de seguridad que se indiquen, para el caso de documentos que cuenten con información susceptible de clasificarse se pondrán a la vista en versión pública y se clasificaran los datos identificativos en términos de lo dispuesto en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, los que se refieren de manera enunciativa más no limitativa de la manera siguiente:

| **Dato** | **Fundamento** | **Justificación** |
| --- | --- | --- |
| Datos identificativos | Trigésimo Octavo, fracción I, número 1, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | El nombre, alias, pseudónimo, domicilio, código postal, teléfono particular, sexo, estado civil, teléfono celular, firma, clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave de Elector, Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, localidad y sección electoral, y análogos |
| Datos de origen | Trigésimo Octavo, fracción I, número 2, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Origen, etnia, raza, color de piel, color de ojos, color y tipo de cabello, estatura, complexión, y análogos |
| Datos ideológicos | Trigésimo Octavo, fracción I, número 3, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Ideologías, creencias, opinión política, afiliación política, opinión pública, afiliación sindical, religión, convicción filosófica y análogos |
| Datos sobre la salud | Trigésimo Octavo, fracción I, número 4 , de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP | EI expediente clínico de cualquier atención médica, historial médico, referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, estado físico o mental de la persona, así como la información sobre la vida sexual, y análogos |
| Datos Laborales | Trigésimo Octavo, fracción I, número 5, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Número de seguridad social, documentos de reclutamiento o selección, nombramiento, incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, solicitud de empleo, hoja de servicio, y análogos |
| Datos patrimoniales | Trigésimo Octavo, fracción I, número 6, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Bienes muebles e inmuebles de su propiedad, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas, inversiones, seguros, fianzas, servicios contratados, referencias personales, beneficiarios, dependientes económicos, decisiones patrimoniales y análogos |
| Datos sobre situación jurídica o legal | Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | La información relativa a una persona que se encuentre o haya sido sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho, y análogos; |
| Datos Académicos | Trigésimo Octavo, fracción I, número 8, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Trayectoria educativa, avances de créditos, tipos de exámenes, promedio, calificaciones, títulos, cedula profesional, certificados, reconocimientos y análogos |
| Datos de tránsito y movimientos migratorios | Trigésimo Octavo, fracción I, número 9, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Información relativa al tránsito de las personas dentro y fuera del país, así como información migratoria, cedula migratoria, visa y pasaporte. |
| Datos electrónicos | Trigésimo Octavo, fracción I, número 10, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Firma electrónica, dirección y correo electrónico y código QR |
| Datos biométricos | Trigésimo Octavo, fracción I, número 11, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento de iris, reconocimiento de la geometría de la mano, reconocimiento vascular, reconocimiento de escritura, reconocimiento de voz, reconocimiento de escritura de teclado y análogos |

Lo anterior para que por conducto de la Unidad de Transparencia se someta a consideración del Comité de Transparencia la clasificación de información; previo a la consulta directa, dicho Comité deberá emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones que podrán dejarse a la vista de la persona solicitante

Además, no se omite mencionar que para poder tener acceso a la información requerida en la modalidad de consulta directa, la persona peticionaria deberá hacer del conocimiento a esa Unidad de Transparencia, que tipo de documento es de su interés, lo anterior para que el OIC se encuentre en posibilidades de garantizar el acceso a la información que conste en documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales de conformidad con la resolución que se emitida por el Comité de Transparencia.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (OIC-SEMARNAT) indicó que el Área de Responsabilidades después de una búsqueda exhaustiva efectuada en los archivos electrónicos y bases de datos así como en los Sistema de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (SPAR), Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS) y en el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas (SIRA), respecto a *"(..) Solicito todos los registros de procedimientos y sanciones iniciadas contra servidores públicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) durante el periodo 7 de enero del 2002 al 37 de marzo de 2023"*, anexa al presente, archivo electrónico en formato PDF, que contiene la información inherente a las(os) servidoras(es) públicas(os), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que han sido sujetos a procedimiento administrativo y en su caso han sido sancionadas(os) por parte de ese Órgano Interno de Control durante el periodo 2002 al 37 de marzo de 2023 desglosado por l) Año, 2) Nombre del servidor público, 3) Cargo del servidor público, 4) Motivo de la queja y/o denuncia y 5) Resolución.

Ahora bien, revelar información sobre de la existencia o inexistencia de algún procedimiento administrativo, en la que no exista una resolución sancionatoria, o en caso de existir sanción esta no se encuentre firme sobre los servidores públicos que se enlistan en el archivo anexo, violaría el derecho de presunción de inocencia al que tiene derecho toda persona independientemente de sí es servidor público o no, de modo tal, que a través del ejercicio de otros derechos no se puede dañar a una persona en su honor o en la estimación y confianza que los demás tienen de ella en el medio social en que se desenvuelve y que es donde directamente repercute en su agravio.

Por lo anterior, resulta necesario considerar aplicable al caso, en los supuestos de procedimientos administrativos que no derivaron en una sanción, o en su caso esta última no se encuentra firme, que la información solicitada recae en lo dispuesto en el precepto normativo previsto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De ahí que, respecto a lo solicitado en el acceso de información que nos ocupa, al tratarse de un listado que incluye datos personales como es el nombre de los funcionarios públicos de la CONANP que hayan sido sometidos a algún proceso administrativo, hayan sido sancionados o no sancionados durante el periodo 2002 al 31 de marzo de 2023, únicamente se proporciona el nombre de los servidores públicos con sanciones y que estas se encuentren firmes, de conformidad con la normatividad anteriormente invocada y el criterio FUNCIONPUBLICA/CT/02/2019, emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, en la Octava Sesión Ordinaria 2019 de fecha 26 de febrero de 2019.

En consecuencia, se emiten las siguientes resoluciones por unanimidad:

**II.B.5.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por la CGOVC de las categorías consistentes en datos identificativos, de origen, ideológicos, sobre salud, laborales, patrimoniales, sobre situación jurídica o legal, académicos, de tránsito y movimientos migratorios, electrónicos, biométricos y, por ende, se autoriza la elaboración de la versión pública con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**II.B.5.2.ORD.20.23: CONFIRMAR** las medidas para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta directa invocadas por la CGOVC en términos de lo dispuesto en el Capítulo X, De la Consulta Directa de Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

**II.B.5.3.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-SEMARNAT, respecto del nombre y cargo de las(os) servidoras(es) públicas(os) denunciados, pero no sancionados, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia.

**B.6 Folio 330026523001795**

Un particular requirió:

*“Solicito todos los registros de procedimientos -quejas y denuncias- iniciadas contra servidores públicos del INECC, durante el periodo 1 de enero del 2002 al 31 de marzo de 2023. De lo anterior, solicito que sea desglosado por 1) Año 2) Nombre del servidor público 3) Cargo del servidor público 4) Motivo de la queja y/o denuncia 5) Resolución.*

*Solicito todos los registros de procedimientos y sanciones iniciadas contra servidores públicos del INECC durante el periodo 1 de enero del 2002 al 31 de marzo de 2023”. (Sic)*

La Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) indicó que referente al desglose consistente en “*…1) Año 2) Nombre del servidor público 3) Cargo del servidor público 4) Motivo de la queja y/o denuncia 5) Resolución…” (Sic)*,la información se encuentra contenida en los expedientes localizados, por lo cual, se ponen a disposición del peticionario las determinaciones que concluyen los expedientes que se encuentran en el área de quejas, constantes de aproximadamente 12,000 hojas útiles, las cuales solo obran en formato físico.

Documentos que deberán atenderse conforme a lo previsto en los artículos 113 (clasificación de confidencialidad), 116 (información reservada) y 134 (elaboración de versiones públicas, una vez acreditado el pago), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en el numeral Trigésimo Octavo de los “Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas”.

Asimismo, en caso de así convenir al peticionario, se ponen a disposición en consulta directa en el domicilio del OIC (consultable en <https://www.gob.mx/sfp/documentos/directorio-de-los-organos-internos-de-control-y-unidades-de-responsabilidades>) de lunes a jueves en un horario de 10:00 a 13:00 horas.

Además es importante precisar que quedará prohibido sustraer, alterar, modificar, divulgar, ocultar, o inutilizar total o parcialmente la información que se ponga a disposición en consulta directa, asimismo, se informa que para el ingreso a las instalaciones será necesario que se registre y observe en todo momento las reglas de seguridad que se indiquen, para el caso de documentos que cuenten con información susceptible de clasificarse se pondrán a la vista en versión pública y se clasificaran los datos identificativos en términos de lo dispuesto en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, los que se refieren de manera enunciativa más no limitativa de la manera siguiente:

| **Dato** | **Fundamento** | **Justificación** |
| --- | --- | --- |
| Datos identificativos | Trigésimo Octavo, fracción I, número 1, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP | El nombre, alias, pseudónimo, domicilio, código postal, teléfono particular, sexo, estado civil, teléfono celular, firma, clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave de Elector, Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, localidad y sección electoral, y análogos |
| Datos de origen | Trigésimo Octavo, fracción I, número 2, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Origen, etnia, raza, color de piel, color de ojos, color y tipo de cabello, estatura, complexión, y análogos |
| Datos ideológicos | Trigésimo Octavo, fracción I, número 3, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Ideologías, creencias, opinión política, afiliación política, opinión pública, afiliación sindical, religión, convicción filosófica y análogos |
| Datos sobre la salud | Trigésimo Octavo, fracción I, número 4, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | EI expediente clínico de cualquier atención médica, historial médico, referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, estado físico o mental de la persona, así como la información sobre la vida sexual, y análogos |
| Datos Laborales | Trigésimo Octavo, fracción I, número 5, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Número de seguridad social, documentos de reclutamiento o selección, nombramiento, incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, solicitud de empleo, hoja de servicio, y análogos |
| Datos patrimoniales | Trigésimo Octavo, fracción I, número 6, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Bienes muebles e inmuebles de su propiedad, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas, inversiones, seguros, fianzas, servicios contratados, referencias personales, beneficiarios, dependientes económicos, decisiones patrimoniales y análogos. |
| Datos sobre situación jurídica o legal | Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | La información relativa a una persona que se encuentre o haya sido sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho, y análogos |
| Datos académicos | Trigésimo Octavo, fracción I, número 8, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Trayectoria educativa, avances de créditos, tipos de exámenes, promedio, calificaciones, títulos, cedula profesional, certificados, reconocimientos y análogos |
| Datos de tránsito y movimientos migratorios | Trigésimo Octavo, fracción I, número 9, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Información relativa al tránsito de las personas dentro y fuera del país, así como información migratoria, cedula migratoria, visa, pasaporte |
| Datos electrónicos | Trigésimo Octavo, fracción I, número 10, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Firma electrónica, dirección y correo electrónico, código QR |
| Datos biométricos | Trigésimo Octavo, fracción I, número 11, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en relación con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento de iris, reconocimiento de la geometría de la mano, reconocimiento vascular, reconocimiento de escritura, reconocimiento de voz, reconocimiento de escritura de teclado y análogos |

Lo anterior para que por conducto de la Unidad de Transparencia se someta a consideración del Comité de Transparencia la clasificación de información; previo a la consulta directa, dicho Comité deberá emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones que podrán dejarse a la vista de la persona solicitante.

Además, no se omite mencionar que para poder tener acceso a la información requerida en la modalidad de consulta directa, la persona peticionaria deberá hacer del conocimiento a esa Unidad de Transparencia, que tipo de documento es de su interés, lo anterior para que el OIC se encuentre en posibilidades de garantizar el acceso a la información que conste en documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales de conformidad con la resolución que se emitida por el Comité de Transparencia.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (OIC-SEMARNAT) indicó que el Área de Responsabilidades después de una búsqueda exhaustiva efectuada en los archivos electrónicos y bases de datos así como en los Sistema de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (SPAR), Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS) y en el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas (SIRA), respecto a *"(…) Solicito todos los registros de procedimientos -quejas y denuncias- iniciadas contra servidores públicos del INECC, durante el periodo 1 de enero del 2002 al 31 de marzo de 2023.”* Al respecto, se anexa al presente, archivo electrónico en formato PDF, que contiene la información inherente a las(os) servidoras(es) publicas(os), del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) que han sido sujetos a procedimiento administrativo y en su caso han sido sancionadas(os) por parte de ese Órgano Interno de Control durante el periodo 2002 al 31 de marzo de 2023 desglosado por 1) Año, 2) Nombre del servidor público, 3) Cargo del servidor público, 4) Motivo de la queja 2 y/o denuncia y 5) Resolución.

Ahora bien, revelar información sobre de la existencia o inexistencia de algún procedimiento administrativo, en la que no exista una resolución sancionatoria, o en caso de existir sanción esta no se encuentre firme sobre los servidores públicos que se enlistan en el archivo anexo, violaría el derecho de presunción de inocencia al que tiene derecho toda persona independientemente de sí es servidor público o no, de modo tal, que a través del ejercicio de otros derechos no se puede dañar a una persona en su honor o en la estimación y confianza que los demás tienen de ella en el medio social en que se desenvuelve y que es donde directamente repercute en su agravio.

Por lo anterior, resulta necesario considerar aplicable al caso, en los supuestos de procedimientos administrativos que no derivaron en una sanción, o en su caso esta última no se encuentra firme, que la información solicitada recae en lo dispuesto en el precepto normativo previsto en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De ahí que, respecto a lo solicitado en el acceso de información que nos ocupa, al tratarse de un listado que incluye datos personales como es el nombre de los funcionarios públicos del INECC que hayan sido sometidos a algún proceso administrativo, hayan sido sancionados o no sancionados durante el periodo 2002 al 31 de marzo de 2023, únicamente se proporciona el nombre de los servidores públicos con sanciones y que estas se encuentren firmes, de conformidad con la normatividad anteriormente invocada y el criterio FUNCIONPUBUCA/CT/02/2019, emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, en la Octava Sesión Ordinaria 2019 de fecha 26 de febrero de 2019.

En consecuencia, se emiten las siguientes resoluciones por unanimidad:

**II.B.6.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por la CGOVC de las categorías consistentes en datos identificativos, de origen, ideológicos, sobre salud, laborales, patrimoniales, sobre situación jurídica o legal, académicos, de tránsito y movimientos migratorios, electrónicos, biométricos y, por ende, se autoriza la elaboración de la versión pública con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**II.B.6.2.ORD.20.23: CONFIRMAR** las medidas para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta directa invocadas por la CGOVC en términos de lo dispuesto en el Capítulo X, De la Consulta Directa de Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

**II.B.6.3.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-SEMARNAT, respecto del nombre y cargo de las(os) servidoras(es) públicas(os) denunciados, pero no sancionados, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**B.7 Folio 330026523001824**

Un particular requirió:

*“Buenas tardes quisiera conocer si las servidoras publicas (...) y (...), actualmente en la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, tienen o han tenido un procedimiento administrativo derivado del desempeño de sus funciones como servidoras publicas cuando ejercieron cargos en la procuraduría federal de protección al ambiente y/o en alguna otra dependencia.*

*Lo anterior considerando como periodo de búsqueda del años 2011 al 05 de abril de 2023”. (Sic)*

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales (OIC-SEMARNAT) solicitó al Comité de Transparencia la clasificación de resultado de la búsqueda de la información que dé cuenta sobre la existencia o inexistencia de quejas, denuncias, investigaciones y procedimientos de responsabilidades administrativas instaurados en contra de las personas identificadas en la solicitud, que no hayan derivado en una sanción de carácter firme, con fundamento en los artículos 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción 1, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas y; el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/07/2020 emitido por el Comité de Transparencia de esta dependencia.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.7.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-SEMARNAT respecto del pronunciamiento, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

**B.8 Folio 330026523001832**

Un particular requirió:

*“INFORME SI EL […], TRABAJADOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO HA SIDO SANCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE POR HABER TRANSGREDIDO LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA.”* (Sic)

El Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Petróleo (OIC-IMP), solicitó al Comité de Transparencia la clasificación de resultado de la búsqueda de la información que dé cuenta sobre la inexistencia de una sanción de carácter firme, con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas y; el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.8.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-IMP, respecto al pronunciamiento, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

**B.9 Folio 330026523001835**

Un particular requirió:

*"Solicito la resolución en donde se inhabilitó a […] en PDF, así como el documento donde lo impugnó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y todas las constancias del expediente del juicio de nulidad, con la debida protección de datos personales”. (Sic)*

La Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) y la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial (DGRVP) informaron que el pronunciamiento constituye información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.9.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por UAJ y la DGRVP respecto al pronunciamiento, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia.

**B.10 Folio 330026523001838**

Un particular requirió:

*“SOLICITO INFORMACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO (...)*

*SE INFORME SI EL SERVIDOR PÚBLICO (...) TIENE REGISTRADO DERECHOHABIENTES ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y/O JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.*

*SE INFORME SI EL SERVIDOR PÚBLICO (...) HA DECLARADO QUE SE ENCUENTRA CASADO*

*SE INFORME SI EL SERVIDOR PÚBLICO (...) HA DECLARADO ALGUN CONFLICTO DE INTERES DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022 Y 2023*

*SE INFORME SI EL SERVIDOR PÚBLICO (...) PRESENTA DENUNCIAS Y/O QUEJAS ANTE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, UNIDAD DE QUEJAS, DENUNCIAS DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y/O SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DEBIENDOSE INDICAR EL ESTADO QUE GUARDAN AL 01 DE ABRIL DE 2023.*

*Datos complementarios: (...) TIENE EL PUESTO DE COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.*

*DESDE ESTE MOMENTO SE HACE NOTAR QUE DICHO SERVIDOR PUBLICO TIENE ACCESO A LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA, POR LO QUE DEBERÁ EXCUSARSE DEL CONOCIMIENTO Y/O TRÁMITE DE LA PRESENTE SOLICITUD.*

*TAMBIEN, HAGO ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO SOBRE ELBER QUIEN ES EL ENCARGADO DEL AREA DE TRANSPARENCIA DE LA JFCA Y  SUELE AVISARLE A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PARA CUBRIRLOS”. (Sic)*

El Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (OIC-STPS) solicitó al Comité de Transparencia la clasificación de resultado de la búsqueda de la información que dé cuenta sobre la inexistencia de una sanción de carácter firme, con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas y; el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.10.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-STPS respecto del pronunciamiento, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia.

**B.11 Folio 330026523001851**

Un particular requirió:

*“SOLICITO LA DECLARACIÓN DE CONCLUSION DEL (…) COMO SUBSECRETARIO EN LA STPS O BIEN EL AVISO QUE DEBIÓ REMITIR A DICHA DEPENDENCIA CUANDO FUE NOMBRADO DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS EN EL SAT. FAVOR NO ORIENTEN A LA PÁGINA PORQUE NO SE ENCUENTRA. TAMBIEN REQUIERO EL AVISO QUE LE HICIERAN EN SU CASO PARA QUE NOTIFICARA A ESA AUTORIDAD SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, ASI COMO LA SANCIÓN A LA QUE EN SU CASO SE HIZO MERECEDOR POR NO NOTIFICAR EN TIEMPO Y FORMA SU CAMBIO AL SAT.” (Sic)*

La Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial (DGRVP) solicitó al Comité de Transparencia la clasificación de resultado de la búsqueda de la información que dé cuenta sobre la inexistencia de quejas, denuncias, investigaciones y procedimientos de responsabilidades administrativas instaurados en contra de la persona identificada en la solicitud, que no hayan derivado en una sanción de carácter firme, con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, así como el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/07/2020 emitido por el Comité de Transparencia de esta dependencia

El OIC-SAT indicó que en cuanto a la declaración de conclusión o aviso que debió remitir la persona referida en su solicitud cuando fue nombrado Administrador General de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se informa que de los antecedentes contenidos en el Registro de Servidores Públicos en DeclaraNet, se separó del cargo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 30 de abril de 2020 e ingresó al SAT el 1°de mayo del mismo año, por lo que en términos del artículo 33, segundo párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no se está obligado a presentar la declaración de conclusión, disposición legal que se transcribe para pronta referencia:

*"En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión." (Sic)*

Ello en correlación con la Norma Séptima, fracción III inciso b) de las Normas e instructivo para el llenado y presentación del formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses, que a la letra indica: "Cuando el servidor público, concluya e inicie en Entes Públicos, dentro del mismo orden de gobierno y no hayan transcurrido más de sesenta días naturales."

Asimismo, en relación con el aviso que debió presentar el servidor público mencionado por el cambio de adscripción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al Servicio de Administración Tributaria, así como las sanciones a que se hizo acreedor por no notificar en tiempo y forma, se hace de su conocimiento que de la búsqueda congruente y exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos con los que cuentan las Áreas del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, durante el periodo comprendido del 1°de mayo de 2020 al 15 de octubre de 2022, proporcionó el resultado de la búsqueda.

En consecuencia, se emiten las siguientes resoluciones por unanimidad:

**II.B.11.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por la DGRVP respecto del pronunciamiento, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

**II.B.11.2.ORD.20.23: MODIFICAR** la respuesta emitida por el OIC-SAT e instruir a efecto de que emita un pronunciamiento respecto de los procedimientos en los que se haya emitido una sanción por falta administrativa grave o no grave que se encuentre firme, lo anterior, en razón de que, dicha información no actualiza lo establecido en la fracción I, del artículo 113, de la LFTAIP; es decir, éstas no pueden ser consideradas como un dato personal, pues al tener el carácter de firmes, dan cuenta de que la autoridad competente determinó que los servidores públicos incurrieron en alguna falta administrativa, y por ende fueron acreedores a una sanción; en ese sentido, el proporcionar dicha información no afectaría ningún tipo de derecho, como el derecho al honor, o presunción de inocencia. En caso de que localice registros de sanciones firmes deberá remitir la expresión documental que dé cuenta de ello.

Asimismo, instruir al OIC-SAT a efecto de que de manera fundada y motivada solicite la clasificación de confidencialidad respecto del pronunciamiento que dé cuenta de la existencia o inexistencia de denuncias y/o investigaciones y/ o procedimientos instaurados en contra de las personas moral identificada en la solicitud que se encuentren en: 1) en trámite; 2) concluidos mediante una resolución definitiva en la que se haya impuesto alguna sanción, pero que se encuentre transcurriendo el plazo para interponer algún medio de defensa en contra de dicha resolución y/o esté en trámite algún medio de defensa; 3) concluidos que no hayan derivado en una sanción, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

La instrucción deberá de cumplimentarse en un plazo máximo de un día hábil, contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya notificado.

**B.12 Folio 330026523001859**

Un particular requirió:

*"1.-Quiero saber cuántas quejas y denuncias se presentaron en contra del ex servidor público Genaro García Luna en el periodo del 1 de diciembre de 2018 a la fecha de la presente solicitud. 2.-Favor de detallar por cada una de las quejas y denuncias, el órgano interno de control o la instancia de la SFP que conoció de estas, la conducta que se denunció, y el estatus o determinación que tuvo cada queja y denuncia (si dio pie al inicio de alguna investigación, si concluyó por acuerdo de archivo, si se determinó incompetencia, etc). 3.-Quiero saber cuántas de estas quejas dieron pie al inicio de un expediente de investigación. 4.-Favor de detallar los números o nomenclatura de los expedientes de investigación y la falta investigada. 5.-Quiero saber cuántos expedientes de investigación dieron pie al inicio de un expediente de responsabilidad administrativa. 6.-Favor de detallar los números o nomenclatura de los expedientes de responsabilidad administrativa y la falta (presunta responsabilidad) en los mismos. 7.-Favor de detallar cuantos expedientes de investigación NO dieron pie al inicio de un expediente de responsabilidad administrativa, detallando el tipo de determinación o conclusión que tuvieron (sobreseimiento, archivo, etc). 8.-Quiero saber cuántos expedientes de responsabilidad administrativa culminó en alguna sanción administrativa, detallando cuántas fueron por faltas graves y cuántas fueron por faltas no graves. 9.-Quiero saber cuántos expedientes de responsabilidad administrativa tuvieron otro tipo de conclusión distinto a la sanción, detallando en qué consistió la misma”. (Sic)*

La Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEPPCI) indicó que el resultado de la búsqueda relacionada con la existencia o inexistencia de denuncia, indagaciones y procedimientos a cargo de los comités de ética de la Administración Pública Federal constituye información confidencial, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el artículo 53, de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética.

Lo anterior, tomando en consideración que los Comités de Ética de la Administración Pública Federal son órganos colegiados, no vinculantes, que tienen a su cargo la implementación de acciones para generar y fortalecer la cultura de integridad gubernamental al interior de las instituciones, así como prevenir conductas contrarias a la ética pública con atribuciones para la atención de denuncias por presuntas vulneraciones al Código de Ética de la Administración Pública Federal, así como a los códigos de conducta institucionales en términos de lo establecido en los numerales 51 a 88 de los Lineamientos Generales.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.12.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por la UEPPCI respecto del resultado de la búsqueda relacionada con la existencia o inexistencia de denuncia, indagaciones y procedimientos a cargo de los comités de ética de la Administración Pública Federal, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el artículo 53, de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética.

**B.13 Folio 330026523001860**

Un particular requirió:

*“Sobre la denuncia de folio 2020/DGDI/DE1 con fecha de envío al OIC de 1/03/2020 donde se investigaba la conducta de enriquecimiento inexplicable solicito a la DGDI de la SFP que me informe lo siguiente:*

*1.-La fecha en que se recibió dicha denuncia y si dicha denuncia fue presentada por un particular o por un servidor público de alguna instancia gubernamental”. (Sic)*

La Dirección de Denuncias e Investigaciones (DGDI) indicó que realizó una búsqueda histórica, amplia y exhaustiva en los archivos documentales y electrónicos con los que cuenta, así como de la consulta electrónica realizada al Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), herramienta que constituye la única fuente oficial de información en materia de atención y seguimiento de quejas y denuncias formuladas al amparo de las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas aplicables, sitio en el que los Órganos Internos de Control, las Unidades de Responsabilidades y la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, son responsables de vigilar su adecuada y oportuna integración.

Derivado de lo anterior, informó que respecto a si la denuncia a que se hace referencia en la solicitud de información que nos ocupa, fue presentada por un particular o por un servidor público de alguna instancia gubernamental, es importante tomar en consideración lo establecido en la fracción VI, del artículo 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que establece que, para el cumplimiento de sus objetivos, los sujetos obligados deberán proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial.

En contexto de lo anterior, cobra relevancia, lo establecido en los artículos 90, primer párrafo, parte *in fine* y 91, segundo párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismos que precisan de manera puntual como una obligación a cargo de las autoridades investigadoras, que los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto, corresponde a las mismas, de igual forma éstas mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.

Ahora bien, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, establece el concepto de la palabra “identidad”, como el *conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás,* esto es, que la identidad no sólo se puede basar en el nombre de la persona denunciante, sino que implica un conjunto de elementos, siendo el caso que nos ocupa, como la calidad de dicha persona, es decir, si fue un servidor público o bien, un particular.

Por otra parte, el Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece el concepto de anonimización, como una técnica que supone el tratamiento de datos personales con el objeto de disociar de manera irreversible o definitiva la información personal de su titular a fin de que no pueda asociarse con él, ni permitir su identificación por su estructura, contenido o grado de desagregación, lo que lleva a considerar lo ya expuesto referente a la obligación de las autoridades investigadoras, respecto a que deben mantener con carácter de confidencial la identidad de las personas denunciantes.

De lo anterior, deriva que una persona denunciante, pone en manos de los sujetos obligados, datos concernientes a su identidad, esperando se traten con el cuidado que les corresponde y que se establece en las disposiciones legales, ello debido a las posibles represalias que pudiera conllevar la interposición de la denuncia respectiva. Ahora, si bien existen dependencias y entidades que por razón de sus atribuciones, los servidores públicos adscritos a ellas pueden dar vista de actos u omisiones que pudieran constituir presuntas irregularidades, lo cierto es que se debe considerar como una excepción, ya que el cuerpo normativo en materia de responsabilidades administrativas, no establece diferencia alguna para el tratamiento de las personas denunciantes, es decir, si cuentan con atribuciones legales o bien, actúan de manera independiente, por lo que se debe atender de igual forma, esto es, suponiendo la generalidad.

En conclusión, debe considerarse como una obligación ineludible de las autoridades el resguardo y secrecía de los datos contenidos en los expedientes respectivos, debiendo mantener con carácter de confidencial, la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones, entendiéndose a la identidad como un conjunto de elementos que pueden hacer identificable a un individuo.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 3, 110, fracción III, 113, fracción I y 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita la clasificación como información confidencial respecto de la calidad de la persona denunciante, ya que, de proporcionarse información al respecto, se podría vulnerar el derecho a preservar su identidad como confidencial, como lo establece el diverso numeral 91, segundo párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.13.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por DGDI, respecto a la calidad del denunciante, esto es, si fue presentada por un particular o por un servidor público de alguna instancia gubernamental, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**B.14 Folio 330026523001888**

Un particular requirió:

*“Solicito del funcionario […], titular de la unidad de responsabilidades, del periodo 2020 a 2023, lo siguiente: Registro de sistema de ingreso a las instalaciones, de entradas y salidas, con fecha y horario de los eventos. Señale si cuenta con vehiculo asignado y dar a conocer los comprobantes de eembolsos por pago de gasolina y mantenimiento. Manifieste si cuenta con chofer asignado, señale el nombre cargo y horario de trabajo. Entregue las contancias del pago de viaticos por comisiones encomentadas por el periodo solicitado. Señale si cuenta con staff de funcionarios para el desempeño de sus funciones, señale nombre y cargos, Agenda publica de las reuniones celebradas, que incluya nombre de personas, fecha, horario y temas tratados. Señale si cuenta con denuncias de acoso y hostigammiento sexual en su contra en alguna de las delegaciones que integran la Unidad”.* (Sic)

La Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses solicitó al Comité de Transparencia confirmar la clasificación de confidencialidad del resultado de la búsqueda realizada en el presente folio, respecto de la existencia o inexistencia de registro de denuncias, indagaciones y procedimientos a cargo de los comités de ética de la Administración Pública Federal.

Lo anterior, en razón de que constituye información confidencial de conformidad con los artículos 116 de la LGTAIP, y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 49, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y lo definido en los “*Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV, del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia”*.

En consecuencia, se emiten la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.14.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por UEPPCI, respecto existencia o inexistencia de registro de denuncias, indagaciones y procedimientos a cargo de los comités de ética de la Administración Pública Federal, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**B.15 Folio 330026523001929**

Un particular requirió:

*"[…] Copia de todas las denuncias que se hayan interpuesto ante ese órgano por el supuesto traslado forzado de los trabajadores de nivel central en la Ciudad de México a la ciudad de origen del C. […].*

*En caso de que dichas denuncias contengan datos personales, le pido que los proteja mediante el testado correspondiente. - El número total de trabajadores que se hayan visto afectados por esta medida, así como los medios y los documentos (correos electrónicos u oficios) que se emplearon para comunicarles sobre el traslado de las oficinas centrales. Le agradezco de antemano su atención y su respuesta oportuna a esta solicitud, en el plazo que señala la ley”. (Sic)*

El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (OIC-IMSS) solicitó al Comité de Transparencia la clasificación de resultado de la búsqueda de la información que dé cuenta sobre la inexistencia de quejas, denuncias, investigaciones y procedimientos de responsabilidades administrativas instaurados en contra de la persona identificada en la solicitud, que no hayan derivado en una sanción de carácter firme, con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, así como el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/07/2020 emitido por el Comité de Transparencia de esta dependencia

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.15.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC- IMSS respecto al pronunciamiento, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia.

**B.16 Folio 330026523001942**

Un particular requirió:

*"REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN I Que el órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional proporcione las denuncias existentes de las posibles irregularidades en el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones por parte de la empresa […] II El acuerdo recaído ante lasdenuncias instadas a ese Órgano Interno de control. III La evidencia de las acciones realizadas por parte de ese Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional para la no ejecución de los contratos adjudicados a la empresa … (Sic)*

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional (OIC-SEDENA) solicitó al Comité de Transparencia la clasificación de resultado de la búsqueda de la información que dé cuenta sobre la inexistencia de quejas, denuncias, investigaciones y procedimientos de responsabilidades administrativas instaurados en contra de la persona identificada en la solicitud, que no hayan derivado en una sanción de carácter firme, con fundamento en los artículos 113, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y; Trigésimo Octavo, fracción II, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.16.ORD.2.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-SEDENA respecto al pronunciamiento, en términos de los artículos 113, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y; Trigésimo Octavo, fracción II, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020.

**B.17 Folio 330026523001946**

Un particular requirió:

*“… a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la cual pertenece a la Federación 1. De la Jefatura de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, solicito toda la documentación escrita o digital desde el inicio, seguimiento y resolución del proceso de investigación de maltrato infantil encauzado a la Profesora de Educación Física, (…), suscitado en la Escuela Primaria "Arnulfo Pérez, ubicada en la Alcaldía Iztacalco en años anteriores a 2017. 2. Asimismo, de la Jefatura del Departamento de Asesoría y Seguimiento de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México requiero toda la documentación escrita o digital que se integró posterior al resultado que emitió la UAMASI (Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil) derivado del proceso de maltrato infantil encauzado a la Profesora de Educación Física, (…), suscitado en la Escuela Primaria "Arnulfo Pérez, ubicada en la Alcaldía Iztacalco. Principalmente requiero los documentos que acrediten las gestiones que se realizaron para que la Profesora de Educación Física, (…), retornara a realizar sus funciones frente a grupo en la Escuela Primaria "Arnulfo Pérez, ubicada en la Alcaldía Iztacalco. Documentación consistente en: • Oficios emitidos por la Jefatura de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, así como por la Jefatura del Departamento de Asesoría y Seguimiento de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México por el que se informó a la Coordinación Sectorial de Educación Primaria, el resultado de la investigación encauzada a la Profesora de Educación Física, (…) ,[Filiación (…)], por maltrato infantil, suscitado en la Escuela Primaria "Arnulfo Pérez, ubicada en la Alcaldía Iztacalco. • Oficio emitido por la Jefatura de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, por el cual fue notificada a la Profesora de Educación Física, (…), el resultado de la investigación encauzada por maltrato infantil, en el cual que la citada profesora estará a disposición en la Coordinación Sectorial de Educación Primaria para su posterior asignación a un Centro de Trabajo Docente. 3. De la Jefatura de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, requiero los documentos físicos o digitales en el que manifiesten las causas por las cuales no se reintegró a la Profesora (…), [Filiación (…)], a realizar funciones frente a grupo, en el año 2028 de conformidad con el resultado de la investigación que realizó la UAMASI (Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil) así, como los nombres y cargos de los responsables de llevar las gestiones para su reincorporación a su centro sustantivo, tal como establece el protocolo para estos procesos. 4. De la Dirección de Empleo de la Coordinación General de Recursos Humanos de la AEFCM requiero los documentos escritos o digitales con los cuales la entonces Dirección Operativa de Primaria 4, realizó la transferencia de la Profesora (…), a la actual Dirección Adjunta de Recursos Humanos, el 12 de abril de 2018 y los documentos escritos y digitales por los que la Dirección de Empleo se dio por enterada de la situación Jurídica por maltrato infantil encauzado a la Profesora de Educación Física, (...). 5. De la misma Dirección de Empleo de la Coo-RIA-Buenas tardes, la expresión documental que requiero de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, es sí es el resultado documentado de la investigación instaurada a la Profra. C19, derivado del maltrato infantil que se le instrumentó. Atentamente”. (Sic)*

El Órgano Interno de Control en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (OIC-AEFCM) solicitó al Comité de Transparencia la clasificación de resultado de la búsqueda de la información que dé cuenta sobre la inexistencia de quejas, denuncias, investigaciones y procedimientos de responsabilidades administrativas instaurados en contra de la persona identificada en la solicitud, que no hayan derivado en una sanción de carácter firme, con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, así como el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/07/2020 emitido por el Comité de Transparencia de esta dependencia

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.17.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-AEFCM en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

**B.18 Folio 330026523001972**

Un particular requirió:

*“Por medio del presente se solicita saber si existe algún procedimiento administrativo y/o denuncia del periodo 2000 al 2023 (abril) de la persona física (…), indicando el año, tipo de sanción, empleo o cargo que se desempeñaba, estatus actual, así mismo se solicita saber si se encuentra desarrollando actualmente un empleo, cargo o comisión en alguna Entidad Paraestatal (ASIPONA)”.* (Sic)

La Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial (DGRVP), la Dirección General de Denuncias e Investigaciones (DGDI), la Unidad de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses (UEPPCI), el Órgano de Control Interno en la Secretaria de la Función Pública ( OIC- SFP) solicitaron al Comité de Transparencia la clasificación de resultado de la búsqueda de la información que dé cuenta sobre la inexistencia de quejas, denuncias, investigaciones y procedimientos de responsabilidades administrativas instaurados en contra de la persona identificada en la solicitud, que no hayan derivado en una sanción de carácter firme, con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, así como el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/07/2020 emitido por el Comité de Transparencia de esta dependencia

En consecuencia, se emiten las siguientes resoluciones por unanimidad:

**II.B.18.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por CGOVC, DGDI, UEPPCI, DGRVP y OIC-SFP respecto al pronunciamiento, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

**B.19 Folio 330026523001980**

Un particular requirió:

*"Por medio de la presente, solicito información pública a la Secretaría de la Función Pública en relación a la posible existencia de una relación de parentesco natural o político entre el ex Secretario General del IMSS, el c. (…) y el c. (...), titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, recientemente denunciado por un grupo del personal a su cargo. En este sentido, solicito que se me proporcione toda la información disponible sobre el tema, incluyendo cualquier documentación, informes, comunicaciones, correos electrónicos, u otro tipo de información que pueda existir y que permita determinar si existe o no dicha relación de parentesco natural o político. Asimismo, solicito que se me informe si existe algún problema de nepotismo en la contratación del c. (…), en caso de que se compruebe la existencia de una relación familiar. Agradezco su atención y quedo en espera de su respuesta en el menor plazo posible.” (Sic)*

El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (OIC-IMSS) a través de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) solicitó al Comité de Transparencia la clasificación de resultado de la búsqueda de la información que dé cuenta sobre la inexistencia de quejas, denuncias, investigaciones y procedimientos de responsabilidades administrativas instaurados en contra de la persona identificada en la solicitud, que no hayan derivado en una sanción de carácter firme, con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, así como el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/07/2020 emitido por el Comité de Transparencia de esta dependencia

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.19.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-IMSS a través de la CGOVC en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

**B.20 Folio 330026523001991**

Un particular requirió:

*“De acuerdo con tus registros documentales, solicitó saber si el exfuncionario público (…) ha sido investigado por esta Secretaría por la presunta responsabilidad administrativa durante el ejercicio alguno de los cargos públicos que ha ocupado en las múltiples dependencias públicas en las que ha fungido (tanto en la Comisión Reguladora de energía; en la Secretaría de Energía; en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, etc.). De ser así, también solicitó conocer cuáles han sido los motivos de las investigaciones, la etapa procesal en la que se encuentra cada una de ellas y, en caso de ya haber sido resuelto, las sanciones que se le impusieron al exfuncionario”. (*Sic)

La Dirección General de Denuncias e Investigaciones (DGDI), la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial (DGRVP) y la Coordinación General de Órganos de Vigilancia (CGOVG) solicitaron al Comité de Transparencia la clasificación de resultado de la búsqueda de la información que dé cuenta sobre la inexistencia de quejas, denuncias, investigaciones y procedimientos de responsabilidades administrativas instaurados en contra de la persona identificada en la solicitud, que no hayan derivado en una sanción de carácter firme, con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, así como el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/07/2020 emitido por el Comité de Transparencia de esta dependencia.

En consecuencia, se emiten las siguientes resoluciones por unanimidad:

**II.B.20.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por DGDI, CGOVC y DGRVP respecto al pronunciamiento, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

**B.21 Folio 330026523002001**

Un particular requirió:

*"Solicito conocer las sanciones administrativas que se le imputarán a […] por haber mentido en su currículum vitae para ocupar un cargo de dirección de área." (Sic)*

En respuesta el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Relaciones Exteriores (OIC-SRE) solicitó al Comité de Transparencia la clasificación de resultado de la búsqueda de la información que dé cuenta sobre la inexistencia de quejas, denuncias, investigaciones y procedimientos de responsabilidades administrativas instaurados en contra de la persona identificada en la solicitud, que no hayan derivado en una sanción de carácter firme, con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, así como el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/07/2020 emitido por el Comité de Transparencia de esta dependencia

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.21.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-SRE en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

**B.22 Folio 330026523002031**

Un particular requirió:

*"De la Secretaría de la Función Pública solicito información respecto del servidor público (…), en su calidad de Director de Administración del Agua adscrito al Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, consistente en: 1. Procedimientos administrativos instaurados o pendientes por resolver referentes a su desempeño como Director de Administración del Agua adscrito al Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 25 de abril de 2023. 2. Sanciones impuestas al servidor público (…), en su calidad de Director de Administración del Agua adscrito al Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, en el periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 25 de abril de 2023”. (Sic)*

El Órgano de Control Interno en la Comisión Nacional del Agua OIC-CONAGUA solicitaron al Comité de Transparencia la clasificación de resultado de la búsqueda de la información que dé cuenta sobre la inexistencia de quejas, denuncias, investigaciones y procedimientos de responsabilidades administrativas instaurados en contra de la persona identificada en la solicitud, que no hayan derivado en una sanción de carácter firme, con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, así como el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/07/2020 emitido por el Comité de Transparencia de esta dependencia.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.B.23.ORD.21.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por la OIC-CONAGUA respecto al pronunciamiento, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia.

**C. Respuesta a solicitudes de acceso a la información en las que se analizará la versión pública**

**C.1 Folio 330026523001590**

Un particular requirió:

*“1.- Se me informe cuantas denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia han tenido desde 1 de enero del 2020 a la fecha.*

*2.- Solicito copias escaneadas en versión pública del recibo de pago correspondiente al mes de diciembre del 2022 del Titular y sus mandos medios y superiores.*

*3.- Cuántas denuncias han integrado por responsabilidad administrativa desglosado por mes y año y cuales han sido las sanciones.*

*4.- Cuántas denuncias ha recibido o integrado el comité de ética de su secretaría desde que se integró a la fecha.*

*5.- Cuántas solicitudes de derechos ARCOP han recibido desde el año 2020 a la fecha desglosado por mes”. (Sic)*

La Dirección General de Recursos Humanos informó, en cuanto al punto 2:

*“…2.- Solicito copias escaneadas en versión pública del recibo de pago correspondiente al mes de diciembre del 2022 del Titular y sus mandos medios y superiores.... En cuanto al punto 2, aclaro lo siguiente: Todo lo relativo a los mandos medios y/o superiores y/o funcionarios u cualquier otra denominación que se le conoce a los servidores públicos de la Secretaría o bien los servidores públicos que se encuentra publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia en el artículo 70 fracción VII.”* (Sic).

La Dirección General de Recursos Humanos pone a disposición del solicitante los recibos de pago en versión pública, previo pago en copia simple o copia certificada, o bien en consulta directa, en virtud de que la documentación solicitada se conforma de 7,161 recibos de pago, que incluyen información clasificada como confidencial, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los datos a testar son el Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, Número de Seguridad Social, Préstamo Personal ISSSTE, Seguro de Vida Institucional (Potenciación), Amortización Crédito FOVISSSTE, pago de pensión alimenticia o de créditos a cargo de las personas servidoras públicas, siendo que dicha información, se considera de carácter confidencial, previa resolución del Comité de Transparencia y en consecuencia, no puede ser proporcionada

Asimismo, se ofrece diversa modalidad de acceso, poniendo a disposición del solicitante la información requerida, a través de consulta directa que realice el propio solicitante en el equipo de cómputo de la Subdirección de Nómina de la Dirección de Remuneraciones y Prestaciones, en la que podrá tener acceso a los recibos de pago del personal, por el periodo requerido.

En esos términos, el solicitante podrá consultar de manera directa la información que requiere, los días viernes de cada semana, en un horario de las 17:00 a las 18:00 horas, hasta su conclusión, en las Oficinas de la Subdirección de Nómina, ubicadas en Insurgentes Sur 1735, Mezzanine, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, sin que, por ningún motivo, se requiera que acredite interés alguno para tal efecto.

Por otra parte, como medidas técnicas, físicas y administrativas para garantizar la integridad de la información a consultar, el solicitante tendrá a su disposición mobiliario consistente en un escritorio o mesa de trabajo, una silla y un equipo de cómputo, en el que podrá realizar la consulta directa de las plantillas del personal e inclusive tomar fotografías y/o capturas, exclusivamente de la información consultada, mediante dispositivo electrónico personal, propiedad del solicitante.

En todo momento, la consulta se llevará a cabo bajo el auxilio y supervisión del C.P. Sergio Ramirez Rivera, con el cargo de Subdirector de Nómina, en la Dirección de Remuneraciones y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, debiendo atender para su acceso y estancia en el inmueble, las medidas de registro y seguridad del Área de Protección Civil de la Dependencia, sin que se permita el acceso de diversa persona para llevar a cabo la consulta, debiendo el solicitante, seguir las indicaciones del personal designado durante y al término de la consulta.

En consecuencia, se emiten las siguientes resoluciones por unanimidad:

**II.C.1.1.ORD.20.23 CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por la DGRH del Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, Número de Seguridad Social, y descuentos personales como el Préstamo Personal ISSSTE, Seguro de Vida Institucional (Potenciación), Amortización del Crédito FOVISSSTE, pago de pensión alimenticia o de créditos en su caso, siendo que dicha información, se considera de carácter confidencial y por ende, se autoriza la elaboración de la versión pública de los recibos de pago que contengan datos personales, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**II.C.1.2.ORD.20.23 CONFIRMAR** las medidas que el personal encargado de la DGRH implementará, de permitir el acceso al solicitante en la consulta directa, a fin de que se resguarde la información clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el formato en el que obra, en términos de lo dispuesto en el Capítulo X de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

**C.2 Folio 330026523001789**

Un particular requirió:

*"Quien le pidió la renuncia a la TOIC de Segalmex, oficios notificaciones, renuncia cualquier comunicado que se haya realizado y copias de conocimiento.*

*Que va hacer el titular del la coordinación de órganos de vigilancia y control para parar el desvío de recursos millonarios igual que el de la función pública*

*Quién será el nuevo titular del oic de Segalmex*

*Cuantas denuncias se tiene contra la titular del oic, copias digitales de todas, investigaciones copia digitales de la investigación, sanciones copia digitales”. (Sic)*

La Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) en términos del criterio de interpretación SO/016/2017 emitido por el Pleno del INAI remitió la versión pública de la renuncia de la C. Rocio Corazón García Salas quien fungía como Titular en el Órgano Interno de Control en Seguridad Alimentaria Mexicana (OIC-SEGALMEX) y en la cual, solicitó clasificar como información confidencial:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dato** | **Justificación** | **Fundamento** |
| Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | El RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial | Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparentica y Acceso a la Información Pública |

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Función Pública (OIC-SFP) informó que el pronunciamiento constituye información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.C.2.1.ORD.20.23 CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por el OIC-SFP en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Trigésimo Octavo, fracción I, número 7, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación con el criterio FUNCIÓNPÚBLICA/CT/01/2020 emitido por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Extraordinaria del 2020.

**II.C.2.2.ORD.20.23 CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por CGOVC respecto del registro federal de contribuyentes (RFC) de la renuncia de la servidora pública y, por ende, se autoriza la elaboración de la versión pública, artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

**C.3 Folio 330026523001799**

Un particular requirió:

*“Deseo que la Secretaría de la Función Pública, reporte la siguiente información.*

*1. Con fecha de 31 de diciembre del año 2018: Número total de Órganos Internos de Control (OIC) en la Administración Pública Federal (APF) y bajo subordinación jerárquica y función de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (DECRETO), por virtud del cual se estableció que los órganos internos de control dependerán en lo subsecuente jerárquica, funcional y presupuestalmente de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018.*

*Número de servidores públicos totales que laboraban en los OIC de la APF (independientemente si se encontraban bajo el servicio profesional de carrera o por honorarios asimilados a salarios).*

*Presupuesto asignado, modificado y ejercido para la totalidad de los OIC en la APF ( independiente de la transferencia de recursos humanos, financieros y materiales correspondientes a la SFP).*

*4. Con fecha 31 de diciembre de 2019: Número total de OIC en la APF, número de servidores públicos que trabajaban o laboraban en los OIC, así como presupuesto asignado, modificado y ejercido para los OIC incluyendo los recursos destinados al pago de los sueldos, prestaciones y demás gastos inherentes al capítulo 1000 "Servicios Personales.*

*5. Con fecha 31 de diciembre de 2020: Número total de OIC en la APF, número de servidores públicos que trabajaban o laboraban en los OIC, así como presupuesto asignado, modificado y ejercido para los OIC incluyendo los recursos destinados al pago de los sueldos, prestaciones y demás gastos inherentes al capítulo 1000 "Servicios Personales.*

*6. Con fecha 31 de diciembre de 2021: Número total de OIC en la APF, número de servidores públicos que trabajaban o laboraban en los OIC, así como presupuesto asignado, modificado y ejercido para los OIC incluyendo los recursos destinados al pago de los sueldos, prestaciones y demás gastos inherentes al capítulo 1000 "Servicios Personales.*

*7. Con fecha 31 de diciembre de 2022: Número total de OIC en la APF, número de servidores públicos que trabajaban o laboraban en los OIC, así como presupuesto asignado, modificado y ejercido para los OIC incluyendo los recursos destinados al pago de los sueldos, prestaciones y demás gastos inherentes al capítulo 1000 "Servicios Personal. “ (Sic)*

La Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) puso a disposición del particular las opiniones a las estructuras orgánicas y ocupacionales (en donde podrá observar el sueldo bruto de las plazas en cada una de las áreas) que emitió la CGOVC (645 fojas útiles) en la modalidad de copia simple, copia certificada y consulta directa.

En este sentido, indicó que para llevar a cabo la consulta directa de la información el personal encargado tomará las siguientes medidas con el objetivo de garantizar y resguardar la información clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el formato en el que obra.

La consulta podrá llevarse a cabo en las instalaciones de esta dependencia ubicada en Insurgentes Sur 1735, colonia Guadalupe Inn, piso 6, ala norte, en un horario de 10:00 a 13:00 horas de lunes a jueves.

Las personas encargadas de gestionar el acceso a las documentales son los CC.:

* Jackeline Irene Martínez Ayala (55) 2000-3000 ext. 1282.
* Cecilia Almaraz Rivera (55) 2000-3000 ext. 1115.
* Felipe Camerino Hernández Alpizar (55) 2000-3000 ext. 1436.

Se estima que una semana es suficiente para realizar la consulta directa de la información.

Queda prohibido sustraer, alterar, modificar, divulgar, ocultar, o inutilizar total o parcialmente la información que se ponga a disposición en consulta directa.

Para el ingreso a las instalaciones será necesario que se registre y observe en todo momento las reglas de seguridad que se indiquen, para el caso de información que sea en versión pública se clasificaran confidenciales o reservados conforme a lo previsto en los artículos 113 (clasificación de confidencialidad), 116 (información reservada) y 134 (elaboración de versiones públicas), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y en el numeral Trigésimo Octavo de los “Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas”, los que se refieren de manera enunciativa más no limitativa de la manera siguiente:

Datos identificativos: EI nombre, alias, seudónimo, domicilio, código postal, teléfono particular, sexo, estado civil, teléfono celular, firma, clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave de Elector, Matricula del Servicio Militar Nacional, numero de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, localidad y sección electoral, y análogos.

Datos reservados como nombre, estructura, relacionados con OIC que pertenecen al sector seguridad nacional.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.C.3.ORD.20.23: CONFIRMAR** las medidas que el personal de la CGOVC deberá implementar, a fin de que se resguarde la información clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el formato en el que obra en términos de lo dispuesto en los numerales Sexagésimo Séptimo, Sexagésimo Octavo, Sexagésimo Noveno, Septuagésimo, Septuagésimo Primero y Septuagésimo Segundo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

**C.4 Folio 330026523001912**

*"Se solicita a la Delegación en Pemex Transformación Industrial del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones la siguiente información: - Versión pública del Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente del expediente 2020/PTI/DE62. - Fecha de elaboración de esta versión pública del expediente 2020/PTI/DE62”. (Sic)*

La Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (UR-PEMEX) remitió la versión pública del acuerdo de conclusión y archivo por falta de elementos del expediente 2020/PTI/DE62, en el que solicitó clasificar como información confidencial:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dato** | **Justificación** | **Fundamento** |
| Nombre de servidores públicos investigados, pero no sancionados | Se refiere a los datosque obran en los folios de una escritura, para hacer constar bajo su fe, uno o varios actos jurídicos, que firmado (o con huella) por los comparecientes, el notario autoriza con su sello y firma autógrafa y en ellos se pueden localizar datos confidenciales como nombre, edad, domicilio, estado civil, etc.; que al constar en un Registro Público pueden considerarse de esa manera, sin embargo, las constancias en que se encuentran fueron obtenidas en el ejercicio de atribuciones, luego entonces atendiendo el principio de finalidad, es que esta dependencia debe protegerlos, al no contar con la autorización de sus titulares para protegerlos y por ende se exige su protección | Artículos 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como los lineamientos para la elaboración de versiones públicas |
| Precio de venta y clientes | En caso de divulgar el precio de venta y cantidad de ventas, entre otra información de su cliente final, sus clientes obtendrán ventajas significativas y fácilmente podrán tomar decisiones de ventas para capturar más negocios con cada uno de los clientes finales, con el riesgo de la pérdida del mercado, por lo que esto llevaría a una pédida significativa a la entidad, con la posibilidad de perder sus ventas actuales con clientes finales o su precio de venta puede caer debido a la competencia desleal con los demás competidores, además puede originar que dicho clientes reclamen e interpongan acciones legales en contra de la entidad, en virtud de que hay una cláusula de confidencialidad en un contrato de compra y debido al hecho de que se comprometió que este tipo de información no sería divulgada en un mundo de libre competencia, por lo que al abrir unilateralmente el modelo de negocio, detalles de operación y el medio ambiente en el que opera la relación comercial de la entidad con sus clientes y que ésta información se considere pública y tengan acceso a ella los competidores y a la cadena de valor, se pone en grave riesgo la operación de la entidad y se permitiría que la competencia tenga una comprensión mucho más profunda de sus fortalezas y debilidades, y por lógica, buscarán oportunidades de negocios para ellos mismos o para obstaculizar su práctica en el mercado en función a nuestras fortalezas y/o debilidades, la comparación de su modelo de negocio y el conocer a sus competidores es un ingrediente clave en la estrategia de mercado, para vencer a los competidores en la comercialización del negocio con eficacia | Artículos 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como los lineamientos para la elaboración de versiones públicas |
| **Dato** | **Justificación** | **Fundamento** |
| Secretos comerciales, industriales, fiscales, bancarios y fiduciarios | La información relativa al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial | Artículos 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como los lineamientos para la elaboración de versiones públicas |
| Domicilio de particular(es) | Atributo de una persona física, que denota el lugar donde reside habitualmente, y en ese sentido, constituye un dato personal | Artículos 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como los lineamientos para la elaboración de versiones públicas |
| Matrícula de empleado | Número designado por la Dirección General de Recursos Humanos, de manera consecutiva, para llevar un registro al interior de la Institución, y representa una forma de identificación personal, el cual contiene datos por los cuales una persona puede ser identificada o identificable. Asimismo, constituye un elemento por medio del cual los trabajadores puedan acceder a un sistema de datos o información de la dependencia o entidad, para hacer uso de diversos servicios, como la presentación de consultas relacionadas con su situación laboral particular | Artículos 113, fracción I, de la LFTAIP y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como los lineamientos para la elaboración de versiones públicas |
| **Dato** | **Justificación** | **Fundamento** |
| Clave Única De Registro de Población (CURP) | Se conoce como CURP por sus iniciales. Es un instrumento que se asigna a todas las personas que residen en México, así como a los mexicanos que se sitúan en el extranjero | Artículos 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como los lineamientos para la elaboración de versiones públicas |

En consecuencia, se emiten las siguientes resoluciones por unanimidad:

**II.C.4.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por la UR-PEMEX respecto del nombre de servidores públicos investigados y no sancionados, domicilio de particulares, matrícula de empleado, clave única de registro de población (CURP) y, por ende, se autoriza la elaboración de la versión pública en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**II.C.4.2.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por la UR-PEMEX respecto del precio de venta a clientes y los secretos comerciales, industriales, fiscales, bancarios y fiduciarios y, por ende, se autoriza la elaboración de la versión pública en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**C.5 Folio 330026523001966**

Un particular requirió:

*"se solicita de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (2019-9-14115-19-0375-08-001) que emitió la ASF sobre para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron pagos por 46.8 miles de pesos a ocho becarios del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", si ya se dio por cumplida o atendida y en su caso, si se abrió un procedimiento de responsabilidades y en su caso la resolución final del OIC.” (Sic)*

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (OIC-STPS)informó que no cuenta con información relacionada con la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con número 2019-9-14115-19-0375-08-001 que emitió la Auditoría Superior de la Federación.

Adicionalmente, informó que derivado de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2019-9-14115-19-0375-08-001, promovida por la Auditoría Superior de la Federación, fue radicada por esta autoridad administrativa bajo el expediente de investigación 2021/STPS/DE77, mismo que se ordenó acumular al diverso 2021/STPS/DE76, en el cual se determinó su archivo por falta de elementos.

Asimismo, cabe precisar que la modalidad en que obra la información solicitada es en formato electrónico.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.C.5.ORD.20.23: MODIFICAR** la respuesta emitida por el OIC-STPS e instruir a efecto de que elabore la versión pública testada en negro de la expresión documental que dan cuenta de lo requerido por el particular.

De contener información confidencial o reservada de conformidad con los artículos 110 y 113, de la Ley Federal de la materia, deberá elaborar las versiones públicas correspondientes, clasificando la misma conforme al procedimiento establecido en la referida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

La instrucción deberá de cumplimentarse en un plazo máximo de un día hábil, contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya notificado.

**C.6 Folio 330026523001970**

Un particular requirió:

*"DE LAS AUDITORÍA PRACTICADAS POR LA ASF AL PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO EN 2019 SOLICITO EL ESTATUS, ASI COMO LA RESOLUCION POR LA CUAL SE DIERON POR ATENDIDAS LAS OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES, ASI COMO SI DE LAS PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SEÑALADAS SE SANCIONÓ A ALGÚN FUNCIONARIO O BIEN SI SE ENCONTRÓ QUE NO HABÍA ELEMENTOS PARA SANCIONAR.” (Sic)*

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (OIC-STPS)informó que el Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, manifiesta que, respecto a las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de las auditorías practicadas al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2019 y 2020, lo siguiente:

Auditoría: 19-014100-23-0374

Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria: 2019-9-14115-23-0374-08-001

Expediente de investigación: 2021/STPS/DE75

Estatus: CONCLUIDO

Sentido: Se determinó su archivo por falta de elementos.

Versión íntegra: El acuerdo de conclusión y archivo se integra por un total de 11 fojas.

Auditoría: 19-014100-23-0374 y 19-014100-19-0375

Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria: 2019-9-14115-23-0374-08-002 y 2019-9-14115-19-0375-08-001

Expediente de investigación: 2021/STPS/DE76 y su acumulado 2021/STPS/DE77

Estatus: CONCLUIDO

Sentido: Se determinó su archivo por falta de elementos.

Versión pública: Cabe precisar que el acuerdo de conclusión y archivo se integra por un total de 43 fojas, mismas que contienen datos personales que de revelarse, identifican o hacen identificable a su titular, por lo cual en caso de requerirse se deberá elaborar la versión pública respectiva.

Auditoría: 19-014100-19-0375

Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria: 2019-9-14115-19-0375-08-002

Expediente de investigación: 2021/STPS/DE78

Estatus: CONCLUIDO

Sentido: Se determinó su archivo por falta de elementos.

Versión íntegra: El acuerdo de conclusión y archivo se integra por un total de 10 fojas.

Auditoría: 19-014100-19-0375

Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria: 2019-9-14115-19-0375-08-003

Expediente de investigación: 2021/STPS/DE79

Estatus: CONCLUIDO

Sentido: Se determinó su archivo por falta de elementos.

Versión pública: Cabe precisar que el acuerdo de conclusión y archivo se integra por un total de 29 fojas, mismas que contienen datos personales que de revelarse, identifican o hacen identificable a su titular, por lo cual en caso de requerirse se deberá elaborar la versión pública respectiva.

Auditoría: 19-014100-19-0375

Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria: 2019-9-14115-19-0375-08-004

Expediente de investigación: 2021/STPS/DE80

Estatus: CONCLUIDO

Sentido: Se determinó su archivo por falta de elementos.

Versión pública: Cabe precisar que el acuerdo de conclusión y archivo se integra por un total de 16 fojas, mismas que contienen datos personales que de revelarse, identifican o hacen identificable a su titular, por lo cual en caso de requerirse se deberá elaborar la versión pública respectiva.

Auditoría: 2020-0-14100-19-0394

Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria: 2020-9-14115-19-0394-08-001

Expediente de investigación: 2022/STPS/DE304

Estatus: EN INVESTIGACIÓN

De contener información confidencial o reservada de conformidad con los artículos 110 y 113, de la Ley Federal de la materia, deberá elaborar las versiones públicas correspondientes, clasificando la misma conforme al procedimiento establecido en la referida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.C.6.ORD.20.23: MODIFICAR** la respuesta emitida por el OIC-STPS e instruir a efecto de que elabore la versión pública testada en negro de las expresiones documentales que dan cuenta de lo requerido por el particular.

De contener información confidencial o reservada de conformidad con los artículos 110 y 113, de la Ley Federal de la materia, deberá elaborar las versiones públicas correspondientes, clasificando la misma conforme al procedimiento establecido en la referida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

La instrucción deberá de cumplimentarse en un plazo máximo de un día hábil, contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya notificado.

**C.7 Folio 330026523002033**

Un particular requirió:

*"Versión pública de la resolución emitida por la SFP, mediante la cual se impuso a Emilio Lozoya Austin, inhabilitación por 10 años emitida en el expediente 000065/2018*

*Datos complementarios: expediente 000065/2018.” (Sic)*

La Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial (DGRVP) remitió versión pública de la resolución del expediente 000065/2018, en la que solicitó clasificar como información confidencial los siguientes datos:

| **Dato** | **Justificación** | **Fundamento** |
| --- | --- | --- |
| Registro Federal de Contribuyentes del servidor público | Clave alfanumérica cuyos datos que la integran hacen posible identificar al titular de la misma, siendo la homoclave única e irrepetible, de ahí que sea un dato personal que debe protegerse | Artículos 116, de la LGTAIP; 113, Fracción I, de la LFTAIP y Lineamiento Trigésimo Octavo Fracción I, de los LGCDVP |
| Nombre del titular de información bancaria | Constituye información confidencial, ya que a través de dicho dato se puede acceder a información relacionada con el patrimonio de una persona determinada | Artículos 116, de la LGTAIP; 113 Fracción I, de la LFTAIP y Lineamiento Trigésimo Octavo Fracción I, de los LGCDVP |
| Información e institución bancaria | Es un dato relacionado con el patrimonio de una persona identificada, lo cual únicamente le incumbe a su titular y a las personas autorizadas para el acceso o consulta de tal información    Por otra parte, el nombre de la institución bancaria pertenece a la esfera patrimonial de un particular y presupone un acto de voluntad de contratar con la institución bancaria de su elección | Artículos 116, de la LGTAIP; 113, Fracción III, de la LFTAIP y Lineamiento Trigésimo Octavo Fracción II y Cuadragésimo Fracción I, de los LGCDVP |
| Relatoría de hechos | Refiere a la narración clara y precisa de circunstancias de modo, tiempo y lugar de presuntas infracciones disciplinarias, que hacen identificable a una persona servidora pública, así como a terceros, por lo que brindar acceso a dicha información afectaría su derecho al honor y a la imagen | Artículos 116 de la LGTAIP; 113 Fracción I de la LFTAIP y Lineamiento Trigésimo Octavo Fracción I de los LGCDVP |
| Antecedentes de sanción | Corresponde a los antecedentes de sanción de procedimientos administrativos diversos al 00065/2018, por lo que dar cuenta de cualquier dato relativo, podría vulnerar los derechos al buen nombre, a la honra y a la dignidad | Artículos 116, de la LGTAIP; 113, Fracción I, de la LFTAIP y Lineamiento Trigésimo Octavo Fracción I, de los LGCDVP |
| Personas dependientes económicas | Son vínculos entre ascendientes y descendientes, por filiación o consanguinidad, que económicamente dependen de una persona, relacionándolos con su nombre, parentesco, patrimonio, entre otros; máxime cuando de dicha información se puede identificar o hacer identificable a sus titulares, por lo que su protección tiende a privilegiar el derecho a la intimidad y vida privada | Artículo 116, de la LGTAIP; 113, fracción I, de la LFTAIP y Lineamiento Trigésimo Octavo Fracción I, de los LGCDVP |
| Información relacionada con el patrimonio de personas físicas | Se trata de activos y pasivos, que son susceptibles de protegerse, principalmente cuando se requiere de la autorización del titular de esa información, toda vez que la publicidad de la misma afecta la esfera de privacidad de una persona, sea o no servidor público | Artículos 116, de la LGTAIP; 113, Fracción II, de la LFTAIP y Lineamiento Trigésimo Octavo Fracción I, de los LGCDVP |
| Parentesco | De la relación por consanguinidad o afinidad, es posible identificar a las personas que se vinculan entre sí, derivado del nexo jurídico que existe entre descendientes de un progenitor común, entre un cónyuge y los parientes de otro consorte, o entre el adoptante y el adoptado, lo cual representa un dato personal que debe ser protegido | Artículo 116, de la LGTAIP; 113, fracción I, de la LFTAIP y Lineamiento Trigésimo Octavo Fracción I, de los LGCDVP |
| Imputaciones respecto de las cuales no se determinó responsabilidad | Son datos que se deben proteger porque dar cuenta de ellos podría lesionar los derechos al honor, dignidad y buen nombre de la persona servidora pública que no fue sancionada | Artículos 116 de la LGTAIP; 113 Fracción I de la LFTAIP y  Lineamiento Trigésimo Octavo Fracción I de los  LGCDVP |
| Nombre de personas morales ajenas al procedimiento. | Resulta un atributo de la personalidad, esto es, la manifestación del derecho de la identidad y razón que por sí misma permite identificar a una persona jurídica determinada, por lo que, debe evitarse su revelación por no ser objeto o parte de las actuaciones en que se encuentra insertos, en tal virtud, su protección resulta necesaria | Artículos 116, de la LGTAIP; 113, Fracción III, de la LFTAIP y Lineamiento Trigésimo Octavo Fracción II, y Cuadragésimo Fracción I, de los LGCDVP |
| Nombre de particulares o terceros ajenos al procedimiento | El nombre es un atributo de la personalidad, es decir, la manifestación del derecho de la identidad y razón que por sí misma permite identificar a una persona física, debe evitarse su revelación por no ser objeto o parte de las actuaciones en que se encuentra insertos, por lo que su protección resulta precisa | Artículos 116, de la LGTAIP; 113, Fracción I, de la LFTAIP y Lineamiento Trigésimo Octavo Fracción I, de los LGCDVP |

En consecuencia, se emiten las siguientes resoluciones por unanimidad:

**II.C.7.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por la DGRVP respecto del Registro Federal de Contribuyentes del servidor público, nombre del titular de información bancaria, relatoría de hechos únicamente aquellos que identifiquen a terceros, antecedentes de sanción, personas dependientes económicas, parentesco, imputaciones respecto de las cuales no se determinó responsabilidad, nombre de particulares o terceros ajenos al procedimiento, y por ende, se autoriza la elaboración de la versión pública con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**II.C.7.2.ORD.20.23:** **CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por la DGRVP respecto de la información relacionada con el patrimonio de personas físicas y, por ende, se autoriza la elaboración de la versión pública con fundamento en el artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**II.C.7.3.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por la DGRVP respecto de información e institución bancaria y nombre de personas morales ajenas al procedimiento y, por ende, se autoriza la elaboración de la versión pública con fundamento en el artículo 113, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**C.8 Folio 330026523002063**

Un particular requirió:

*“*Actas entregas recepción de la Unidad o Subdirección jurídica de los últimos 3 años*.” (Sic)*

La Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública (UCEMGP) remitió en máxima publicidad el acta administrativa de entrega – recepción número 39317 correspondiente al puesto de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídico, en la cual, se solicitó clasificar como información confidencial los siguientes datos:

| **Dato** | **Fundamento** | **Justificación** |
| --- | --- | --- |
| Domicilio de particular(es) | Atributo de una persona física, que denota el lugar donde reside habitualmente, y en ese sentido, constituye un dato personal | Artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública |
| Clave de elector | Composición alfanumérica compuesta de 18 caracteres, mismos que hacen identificable a una persona física, que se conforma por las primeras letras de los apellidos, año, mes, día, sexo, clave del estado en donde nació su titular, así como una homoclave que distingue a su titular de cualquier otro homónimo, por lo tanto se trata de un dato personal que debe ser protegido | Artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública |
| Número de ficha, de credencial o de empleado | Se trata de un código identificador del empleado, con el cual puede tener acceso a diversa información inclusive sus datos personales, por lo que debe protegerse | Artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública |

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**II.C.8.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de confidencialidad invocada por la UCEMGP respecto del domicilio de particulares, clave de elector y número de ficha, de credencial o de empleado y, por ende, se autoriza la elaboración de la versión pública en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**III. Análisis de solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.**

**A.1 Folio 330026523001520**

Un particular requirió:

*“Solicito copia certificada de la totalidad del expediente iniciado en contra de los elementos de la Guardia Nacional que intervinieron los hechos en los que perdieran la vida y llevaban por nombres […] y […].*

El OIC-GN informó que el 4 de enero de 2023 se recibió el oficio GN/UAI/DGII/00016/2022 en el cual se denunciaron los hechos del 1 de enero de 2023, coincidiendo con lo requerido en la solicitud de mérito y aperturando el expediente número 2023/GN/DE08

No obstante, indicó que las documentales que se anexan en la misma solicitud, se suscriben a un poder notarial en el cual no existe evidencia que permita constatar el parentesco entre los occisos y las personas poderantes, por lo que resulta improcedente el ejercicio de derechos ARCO en términos del artículo 55, fracción I, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**III.A.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la improcedencia invocada por el OIC-GN respecto de la acreditación de personalidad en términos del artículo 55, fracción I, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

**A.2 Folio 330026523001857**

Un particular solicitó:

*“se les solicito las tenencias de las 1,500 patrullas rentadas a Integra Arrenda y pretenden cobrar 1000 pesos, cuando 1500 patrullas por 3 años de tenencia, serian 4,500 copias que no estoy obligado a pagar, porque las rentaron por 4,600 millones de pesos y el presidente ordenó que se investigara el sobre precio cobrado así como transparentar todo/ ; si esta empresa no pagó las tenencias de sus 2,500 patrullas rentadas en la CDMX y la SSC ya le esta requiriendo su presentación veo difícil que en PF lo haya hecho, por lo tanto solicito a la vista todas las tenencias de los 3 años, la entrega de las actas de resguardo donde recibieron todas las patrullas con su placa, tarjeta de circulación, tenencia pagada ,/ solicito todos los documentos de esa licitación en Compranet con los estudios de Mercado, solicito la revisión del OIC de PF ahora de GN a los anexos direccionados y el sobre precio en el mantenimiento que realizó y la auditoría practicada , solicito el expediente con los oficios que giro y recabo por la denuncia de su servidor […] que acreditare mi personalidad como denunciante en el OIC . / se ingreso al INAI el recurso vía su correo ya que la GN impidió ingresarlo vía la PNT / La SFP recibió una nueva denuncia por estas patrullas con las de la CDMX , se solicitan los oficios al respecto y que acciones tomo el OIC de Protección Federal , GN , SEDENA,” (Sic)*

El Órgano Interno de Control en la Guardia Nacional (OIC-GN) informó que, en cuanto al acceso de sus datos personales, localizó el expediente 2021/GN/DE540, sin embargo, el mismo, por una parte, contiene datos personales de terceros consistente en nombre de empleados de la persona moral Arrenda Integra S.A. de C.V., por lo que, solicita la improcedencia a éstos en términos del artículo 55, fracción IV, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, por otro lado, precisó que contiene información susceptible de reserva, como lo es, el nombre de los integrantes de la Guardia Nacional y servidores públicos del OIC-GN, así como las características técnicas de los equipos del radio patrullas, lo anterior términos del artículo 110, fracción I y V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el periodo de 5 años.

Continuando, puso a disposición del solicitante la versión pública de la auditoría 08/2019 “Coordinación de Servicios Generales / Adjudicaciones Directas”, así como las cédulas de observaciones correspondientes.

En ese sentido, tomando en consideración el criterio de interpretación de SO/001/2023 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cuyo rubro establece “Obligación de dar trámite a solicitudes que impliquen tanto el ejercicio de derechos ARCO, como de acceso a la información pública”, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**III.A.2.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la improcedencia invocada por el OIC-GN respecto de los datos personales de terceros consistente en nombre de empleados de la persona moral Arrenda Integra S.A. de C.V., contenidos en el expediente 2021/GN/DE540, en términos del artículo 55, fracción IV, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

**III.A.2.2.ORD.20.23 CONFIRMAR** la reserva respecto del nombre de los integrantes de la Guardia Nacional y servidores públicos del OIC-GN, así como las características técnicas de los equipos del radio patrullas contenidos en el expediente 2021/GN/DE540, en términos del artículo 110, fracciones I y V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el periodo de 5 años.

En términos del artículo 104, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se emite la siguiente prueba de daño respecto a la causal de reserva prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Dar acceso a la información relativa a los números de los vehículos, sus características y especificaciones técnicas, así como, del equipo policial; revela información estratégica sobre la operación y cumplimiento de sus objetivos, lo que permite que grupos criminales obtengan información relacionada con la capacidad de reacción en los operativos de la Institución, lo que implica un grave riesgo a la infraestructura logística de carácter estratégico, indispensables para las labores de seguridad pública a la que está obligada la Guardia Nacional.

Al hacerse pública la información mencionada, la delincuencia organizada estaría en posibilidad de tener conocimiento del estado de fuerza y de reacción que se cuenta para realizar acciones de seguridad pública que se llevan a cabo, por lo que, podrían potenciar un ataque en contra de la vida e integridad de los elementos que se encuentran realizando acciones operativas de seguridad, las cuales, permiten prevenir la comisión de delitos y garantizar el orden y la paz pública; por lo que, la perpetración de atentados en contra de los elementos de la Guardia Nacional comprometería la eficacia de las actividades estratégicas de combate a la delincuencia organizada.

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable:Revelar dicha información permite determinar las características técnicas (número de serie y clave vehicular), así como, especificaciones y descripción del equipo policial con los que cuenta la Guardia Nacional para la prevención de la comisión de delitos, incrementando la posibilidad de que las organizaciones delincuenciales se abastezcan y superen la capacidad operativa y de reacción de esta institución, por lo que su difusión, podría ocasionar un riesgo ya que se desconoce el uso que se le pudiera dar y se revelaría información actualizada sobre el armamento y equipo ((vehículos y armamento) que fue adquirido por la Guardia Nacional para el cumplimiento de sus objetivos, además, revela datos sensibles para el estado de fuerza de esta institución policial, entendiendo a éste como aquella aptitud mediante la cual, el Estado ejerce el monopolio legítimo de la coacción con el fin de prevenir y perseguir los delitos, que se conforma por diversos elementos que en conjunto tienen como objetivo el resguardo de la seguridad y paz pública, así como, la persecución del delito; es decir, se integra por la capacidad de acción y de la de sus elementos objetivos y subjetivos; poniendo en evidente riesgo la vida de la ciudadanía, así como, la integridad de los policías federales en el presente y en un futuro.

Revelar la información que nos ocupa permitiría el diseño y aplicación de estrategias delictivas, tendientes a menoscabar, dificultar o impedir los diseños operativos de la Guardia Nacional, que implican la utilización de las diferentes características de armas con las que cuenta de tal manera que sería posible determinar con un alto grado de certeza, la capacidad de operación y reacción de esta institución poniendo en riesgo las operaciones sustantivas de la institución en materia de prevención del delito y combate de delitos.

La difusión de la información concerniente a las características técnicas (número de serie y clave vehicular), así como, especificaciones y descripción del equipo policial abre la posibilidad de que en caso de que llegue a manos de personas y lo grupos criminales integrados por sujetos que cuentan con alto perfil criminológico, organizativo y económico, elaboren modelos estadísticos para generar el análisis de vulnerabilidad de la operación de la Guardia Nacional, restando eficacia al sistema de prevención y persecución de delitos federales. Se vulneraría el estado de fuerza y capacidad de reacción de esta Guardia Nacional en todo el territorio nacional; lo que abre la posibilidad de ataques en contra de bienes propiedad de la Guardia Nacional, por parte de la delincuencia organizada y se pone en riesgo la vida e integridad física de los integrantes de la institución que hacen frente a los delincuentes y que participan en operativos como en actividades de inteligencia para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

II. El riesgo que supondría la divulgación de dicha información supera el interés público de que se difunda:Dar a conocer las características técnicas (número de serie y clave vehicular), así como, especificaciones y descripción del equipo policial con las que cuenta la Guardia Nacional para la prevención de la comisión de delitos, vulnera la realización de los objetivos de esta institución, tales como salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como, preservar las libertades, el orden y la paz públicos; aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos; prevenir la comisión de los delitos e investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación en términos de las disposiciones aplicables, en virtud de que revela la capacidad operativa, colocando en grave riesgo la seguridad pública e integridad de las personas que en ella laboran, al ser quienes ejecutan las acciones encaminadas al cumplimiento de los deberes conferidos a esta Institución, además de correr un severo riesgo de afectación para la conservación del Estado de derecho mexicano.

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio:El acceso a la información pública es un derecho fundamental, el cual, todo ciudadano puede ejercer, éste tiene restricciones; es decir, no es absoluto, ya que en un estado de derecho, debe prevalecer el orden, paz pública y seguridad de las personas, razón por lo cual entregar la información relativa las características técnicas (número de serie y clave vehicular), así como, especificaciones y descripción del equipo policial reduce la capacidad de respuesta de la Guardia Nacional, perjudicando el cabal cumplimiento de los objetivos institucionales de mantener, garantizar y restablecer el orden y la paz pública salvaguardando la integridad de las personas.

Así, tomando en consideración la prueba de daño realizada, en términos de lo establecido en los artículos 99, párrafo segundo y 100, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se determina que el plazo de reserva debe ser de 5 años, el cual, podrá modificarse en caso de variación en las circunstancias que llevaron a establecerla.

En términos del artículo 104, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se emite la siguiente prueba de daño respecto a la causal de reserva prevista en el artículo 110, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Reserva de los nombres de integrantes y/o exintegrantes de la Policía Federal/Guardia Nacional. Con fundamento en los artículos 100, 101 segundo párrafo, 103, 104 y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 99, 100, 102, 110 fracción V y artículo 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los Lineamientos Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Séptimo Fracción I, Vigésimo Tercero, Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, no es procedente la entrega de la información solicitada, en virtud de que la misma se encuentra clasificada como RESERVADA, por un periodo de reserva de 5 años. Lo anterior bajo el tenor de la siguiente motivación y prueba de daño:

MOTIVACIÓNEl proporcionar información de los servidores públicos que prestan o prestaron sus servicios en este Órgano Administrativo Desconcentrado, pondría en riesgo la seguridad, así como la operatividad de la Guardia Nacional, siendo obligación de la Institución protegerla en todo momento para salvaguarda de sus integrantes, debido a que lo requerido se refiere a información personal de un integrante en particular, información suficiente que confirmada por otros medios convierte al funcionario en una persona identificada e identificable, lo anterior por estimarse que su difusión puede conllevar a riesgos personales que puedan alcanzar hasta su familia por la posible utilización de la información por grupos delictivos.

Asimismo, proporcionar información que permita identificar a integrantes de esta Institución constituye un grave riesgo, toda vez que el desarrollo de tareas policiales, ya sean de tipo administrativas u operativas, según sea el caso, se tiene acceso y conocimiento de la estructura operativa, de los planes y estrategias referente a los operativos instrumentados por la Guardia Nacional, así como de información de otros integrantes, poniendo en situación de vulnerabilidad tanto a la Guardia Nacional como a su personal, menoscabando las actividades de prevención o persecución de los delitos.

En este orden de ideas, el daño que se considera con la difusión de la información que nos ocupa abre una de las formas en que la delincuencia pueda llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas de Seguridad Pública, y con ello vulnerar el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes.

I. La difusión de esta información representa un riesgo real, un riesgo de perjuicio y limitación como a continuación se señala: El proporcionar la información solicitada afecta la intimidad de los funcionarios, toda vez que los convierten en unas personas identificadas e identificables, poniendo en riesgo de manera directa la vida y la seguridad de los integrantes o ex integrantes de esta Institución, toda vez que hacen identificables a personas con su función y su permanencia, pudiéndose ocasionar riesgos personales en su vida y seguridad, que pueden alcanzar hasta sus familias.

Se considera que la información requerida por el peticionario representa la posibilidad de que personas ajenas a la Institución las utilicen para sorprender a la ciudadanía y realizar extorsiones al amparo de usurpar la personalidad de los funcionarios en cuestión; ya que se puede relacionar a un integrante o exintegrante (del que el solicitante ya proporciona un nombre completo) con la temporalidad de los asuntos que se llevan en un momento específico, o bien que integrantes de organizaciones criminales lo contacten para presionarlo en entregar información relacionada a la estructura jerárquica de la Guardia Nacional, nombres de elementos desplegados, que participan en los operativos instrumentados por este Órgano Administrativo Desconcentrado, e incluso documentación emitida por la propia Institución, colocando en inminente riesgo la vida de todo el personal activo, menoscabando así las actividades de prevención del delito y combate a la delincuencia.

Se vulnera la seguridad, integridad y derechos de la persona en comento, poniendo en riesgo la vida de cualquier integrante o ex integrante de la Guardia Nacional, que puedan alcanzar hasta sus familias por la posible utilización de la información por grupos delictivos.

II. El riesgo de perder la vida, la seguridad o la integridad se encuentra presente y es de mayor gravedad que la negativa de acceso a la información solicitada, la divulgación de la información puede generar un daño proporcionado o innecesario, lo cual debe evitarse en la medida de lo posible, frente a aquella que se solicita. Es de interés público y socialmente relevante la protección a la vida y seguridad de todas y cada una de las personas sobre cualquier otro derecho fundamental, es obligación de la Guardia Nacional proteger a quienes trabajan y participan al logro de los fines de esta Institución.

En ese mismo contexto, resulta pertinente establecer que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos, establecen que el derecho a la vida y la seguridad personal son los bienes supremos tutelados por los gobiernos, esto quiere decir, que no existe derecho alguno por encima de la vida y la seguridad personal. El derecho al acceso a la información, tutelado en el artículo sexto de nuestra Carta Magna, no es absoluto per se, toda vez que su objetivo es facultar a las personas a tener acceso a la información que les permita conocer cómo funcionan los órganos de gobierno, como parte fundamental de todo Estado democrático; dicho derecho permite a las personas tener una participación activa en la toma de decisiones de los gobernantes y a su vez, funciona como un ejercicio de fiscalización para supervisar las actividades que realiza el Estado; sin embargo, dicha garantía tiene sus limitaciones, mismas que se encuentran plasmadas en la Tesis Aislada, emitida por el Poder Judicial cuyo rubro establece: “INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).”

En ese orden de ideas y de la simple lectura de lo transcrito, se puede establecer que el derecho a la vida y seguridad nacional tiene una primacía que el derecho al acceso a la información, por lo que el bien jurídico a salvaguardarse primordialmente, es la vida y la seguridad de los servidores públicos o ex servidores de esta Institución Policial. Sirve también de sustento, el Criterio 06/09, emitido por el pleno del entonces IFAI, ahora INAI, que señala: “Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por excepción pueden considerarse información reservada. De conformidad con el artículo 7, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el nombre de los servidores públicos es información de naturaleza pública.

No obstante, lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad de que existan excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando la información actualice algunos de los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley. En este sentido, se debe señalar que existen funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública, a través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones (…).”

**III.A.2.3.ORD.20.23: MODIFICAR** la respuesta del OIC-GN e instruir a efecto de que remita la auditoría 08/2019, la cual de contener información confidencial o reservada de conformidad con los artículos 110 y 113, de la Ley Federal de la materia, deberá elaborar las versiones públicas correspondientes, clasificando la misma conforme al procedimiento establecido en la referida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

La instrucción deberá de cumplimentarse a más tardar el día siguiente hábil a la notificación de la presente resolución.

**A.3 Folio 330026523001939**

Un particular requirió:

*“falta de respuesta en la solicitud folio No. 330026522003001, del 24 de octubre del 2022, en el que el sujeto obligado nunca nos proporcionó el formato de pago por concepto de pago de derechos de copias y envío, no obstante los múltiples correos electrónicos que se efectuaron a la Unidad de Transparencia, por lo que, hasta esta fecha persiste el incumplimiento de entrega de la documentación requerida . (Sic)”*

La Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (UR-PEMEX) informó que la expresión documental que da cuenta de la información requerida por el recurrente, en el expediente 120567/2020/DGDI/PEMEX/PP200 y 2020/PEMEX/DE161, que contiene datos de personales de terceros, por lo que se testan dichos datos y solicita la improcedencia en términos del artículo 55 fracción IV de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**III.A.3.ORD.20.23: CONFIRMAR** la improcedencia invocada por la UR-PEMEX respecto de datos personales en los expedientes 120567/2020/DGDI/PEMEX/PP200 y 2020/PEMEX/DE161 en términos del artículo 55 fracción IV de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

**A.4 Folio 330026523002067**

Un particular requirió:

*“Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conformidad en el ejercicio de mis derechos ARCO, comparezco ante usted para solicitarle a usted una copia certificada del Acuerdo de Conclusión y Archivo del EXPEDIENTE: 2021/BANOBRAS/DE14, que obra en poder del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como una copia certificada del expediente completo de toda la documentación sujeta a la revisión, análisis y estudio que le aportaron las diversas área que estuvieron involucradas al expediente de la queja, en virtud a que me fue informado mediante oficio 06/320/AQ353/2022 por el Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el pasado 14 de junio de 2022, el sentido de esa determinación, expedirme copia respectiva del documento que la contiene. Lo anterior, a fin de conocer el alcance y argumentos que le fundamentaron, es por ello que solicito en el ejercicio de mis derechos ARCO, se me de acceso al mismo, a través de la entrega por la vía del correo electrónico o bien por mensajería. Para sus efectos, adjunto a la presente solicitud copia de mi INE, así como copia de los oficios 06/320/AQ353/2022 y 06/320/AQ077/2023.” (Sic)*

El OIC-BANOBRAS informó que localizó el expediente 2021/BANOBRAS/DE14, constante de 1,101 fojas, el cual, se presenta un Acuerdo de Conclusión y Archivo, por lo que pone a disposición la versión pública previo pago de derechos por costos de reproducción.

No obstante, indicó que las documentales contienen datos personales de terceros, por lo que, solicitó la improcedencia a éstos en términos del artículo 55, fracción IV, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**III.A.4.ORD.20.23: CONFIRMAR** la improcedencia invocada por el OIC-BANOBRAS respecto de datos personales de terceros contenidos en el expediente 2021/BANOBRAS/DE14, en términos del artículo 55, fracción IV, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**IV. Cumplimiento a resoluciones del INAI**

**A.1 Folio 330026522003042 RRD 416/23**

El Pleno del INAI al resolver el recurso de revisión determinó revocar la respuesta e instruir a efecto de que:

*“… cese los actos encaminados a obstaculizar el derecho de acceso a datos personales de la persona peticionaria y realice todas las gestiones necesarias a fin de proporcionar a la misma la respuesta recaída a la solicitud que nos ocupa. se precisa que el responsable deberá ofrecer la información en las modalidades de copia simple o copia certificada.*

*Deberá ofrecer la información en las modalidades de copia simple o copia certificada “. (Sic)*

Para dar cumplimiento a la resolución número RRD 416/23, emitida por el INAI, se turnó para su atención correspondiente a la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (UR-PEMEX)

La UR-PEMEX, remitió la expresión documental que da cuenta de lo requerido por el particular, la cual consta de 33 hojas, testando datos personales de terceros, en términos del artículo 55, fracción IV de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,

Además, en dicho documental obran datos personales de terceros que serán testados en términos de lo dispuesto en el artículo 55, fracción IV de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, solicitando la improcedencia de acceso a datos de tercero, con el fundamento antes referido.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**IV.A.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la improcedencia invocada por la UR-PEMEX de los datos personales de terceros en términos del artículo 55, fracción IV, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

**A.2 Folio 330026522003067 RRD 423/23**

El Pleno del INAI al resolver el recurso de revisión determinó modificar la respuesta e instruir a efecto de que:

*“Entregue la versión del expediente 120567/2020/DGDI/PEMEX/PP200, donde se deje visible nombres, firmas, edad y antigüedad de los servidores públicos, sin contemplar las hojas que integran la denuncia de hechos presentada por la persona recurrente, lo anterior de manera gratuita derivado que la persona ya realizó un pago para la obtención de dicha información“ (Sic)*

Para dar cumplimiento a la resolución, emitida por el INAI, se turnó para su atención correspondiente a la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (UR-PEMEX).

Por lo cual la UR-PEMEX, remitió la expresión documental que da cuenta de lo requerido por el particular, la cual consta de 28 hojas, dejando visibles los datos, consistentes en nombres, firmas, edad y antigüedad de los servidores públicos, sin contemplar las hojas que integran la denuncia de hechos presentada por la persona recurrente.

Además, en dicho documental obran datos personales de terceros que serán testados en términos de lo dispuesto en el artículo 55, fracción IV de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**IV.A.2.ORD.20.23: CONFIRMAR** la improcedencia invocada por la UR-PEMEX respecto de los datos personales de terceros, del expediente 120567/2020/DGDI/PEMEX/PP200, en términos del artículo 55, fracción IV, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**V. Alcance a respuesta inicial derivado de un recurso de revisión del INAI**

**A.1 Folio 330026522001586 RRD 5509/23**

Un particular requirió

*“Se solicita el contrato de vigilancia DC-372-2019 (con sus respectivos anexos) de dicho sujeto (en su caso, las respectivas versiones públicas). En caso de que la respuesta rebase los límites de carga de la Plataforma Nacional de Transparencia, se requiere se remita al correo electrónico descrito en la solicitud de mérito. Lo anterior, ya que lo busqué en la Plataforma Nacional de Transparencia y el mismo no se encuentra cargado.” (Sic)*

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) remitió la versión pública del contrato de vigilancia DC-372-2019 y sus anexos, en los cuales, solicitó clasificar como información reservada las características técnicas de información relativa a los números de los elementos, horarios, grupos sobre la operación y cumplimiento de sus objetivos, tipo de armas y características en las especificaciones técnicas; en virtud de que se considera información susceptible de vulnerar la seguridad del personal del inmueble y visitantes, en términos de lo dispuesto en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el periodo de 5 años.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**V.A.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación de reserva invocada por la DGRMSG respecto de las características técnicas de información relativa a los números de los elementos, horarios, grupos sobre la operación y cumplimiento de sus objetivos, tipo de armas y características en las especificaciones técnicas; en virtud de que se considera información susceptible de vulnerar la seguridad del personal del inmueble y visitantes, en términos de lo dispuesto en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el periodo de 5 años.

En términos del artículo 104, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se emite la siguiente prueba de daño:

Dar acceso a la información relativa a los horarios, turnos, números de elementos, grupos de distribución y tipo de armas) y características de las especificaciones técnicas, de la seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Secretaria de la Función Pública; revela información estratégica sobre la distribución de los grupos y horarios, lo que permite que grupos criminales obtengan información relacionada con la capacidad de reacción en los operativos de la Institución, lo que implica un grave riesgo a la infraestructura logística de carácter estratégico, indispensables para las labores de seguridad pública a la que está obligada los elementos de Protección Federal.

Al hacerse pública la información mencionada, la delincuencia organizada estaría en posibilidad de tener conocimiento de los grupos con lo que opera la Dependencia por lo que, podrían potenciar un ataque en contra de la vida e integridad cada uno de los elementos así como del personal que se encuentre en cada uno de los inmuebles y de sus visitantes, las cuales, permiten prevenir la comisión de delitos y garantizar el orden y la paz pública; por lo que, comprometería la eficacia de las actividades estratégicas de combate a la delincuencia organizada.

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable:Revelar dicha información permite determinar la información respecto a las Especificaciones técnicas, así como, características y descripción de los elementos policiales con los que cuenta la Secretaria de la Función Pública, para la prevención de la comisión de delitos, incrementando la posibilidad de que las organizaciones delincuenciales se abastezcan y superen la capacidad operativa y de reacción de esta institución, por lo que su difusión, podría ocasionar un riesgo ya que se desconoce el uso que se le pudiera dar y se revelaría información actualizada sobre los números de elementos, horarios, grupos de distribución y equipo de armamento que fue contratado por la Secretaria de la Función Pública para el cumplimiento de los objetivos.

Revelar la información que nos ocupa permitiría el diseño y aplicación de estrategias delictivas, tendientes a menoscabar, dificultar o impedir los diseños operativos de la Secretaria de la Función Pública, que implican la utilización de las diferentes características de armas con las que cuenta de tal manera que sería posible determinar con un alto grado de certeza, la capacidad de operación y reacción de esta institución poniendo en riesgo las operaciones sustantivas de la institución en materia de prevención del delito y combate de delitos.

La difusión de la información concerniente conforme al números de elementos, horarios, tipo de armas, distribución de los grupos, así como las especificaciones técnicas, abre la posibilidad de que en caso de que llegue a manos de personas y lo grupos criminales integrados por sujetos que cuentan con alto perfil criminológico, organizativo y económico, elaboren modelos estadísticos para generar el análisis de vulnerabilidad de la operación de la Secretaría de la Función Pública, restando eficacia al sistema de prevención y persecución de delitos federales.

Se vulneraría el estado de fuerza y capacidad de reacción de esta Secretaria de la Función Pública, en los diferentes inmuebles de esta Dependencia, lo que abre la posibilidad de ataques en contra de ellos, por parte de la delincuencia organizada y se pone en riesgo la vida e integridad física del personal de la institución así como de sus visitantes, que hacen frente a los delincuentes y que participan en operativos como en actividades de inteligencia para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

II. El riesgo que supondría la divulgación de dicha información supera el interés público de que se difunda: Dar a conocer las características técnicas (horarios, turnos, números de elementos, grupos de distribución), así como, las especificaciones técnicas y descripción del equipo policial con las que cuenta la Secretaria de la Función Pública para la prevención de la comisión de delitos, vulnera la realización de los objetivos de esta institución, tales como salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como, preservar las libertades, el orden y la paz públicos; aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos; prevenir la comisión de los delitos e investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación en términos de las disposiciones aplicables, en virtud de que revela la capacidad operativa, colocando en grave riesgo la seguridad pública e integridad de las personas que en ella laboran, al ser quienes ejecutan las acciones encaminadas al cumplimiento de los deberes conferidos a esta Institución, además de correr un severo riesgo de afectación para la conservación del Estado de derecho mexicano.

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio: El acceso a la información pública es un derecho fundamental, el cual, todo ciudadano puede ejercer, éste tiene restricciones; es decir, no es absoluto, ya que en un estado de derecho, debe prevalecer el orden, paz pública y seguridad de las personas, razón por lo cual entregar la información relativa las características técnicas (horarios, turnos, números de elementos, grupos de distribución), así como, especificaciones y descripción del equipo policial reduce la capacidad de respuesta de la Secretaria de la Función Pública, perjudicando el cabal cumplimiento de los objetivos institucionales de mantener, garantizar y restablecer el orden y la paz pública salvaguardando la integridad de las personas.

Así, tomando en consideración la prueba de daño realizada, en términos de lo establecido en los artículos 99, párrafo segundo y 100, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se determina que el plazo de reserva debe ser de 5 años, el cual, podrá modificarse en caso de variación en las circunstancias que llevaron a establecerla.

**SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**VI. Solicitudes de acceso a la información en las que se analizará el término legal de ampliación de plazo para dar respuesta**

La Dirección General de Transparencia y Gobierno Abierto (DGTGA), solicita a este Comité de Transparencia la ampliación del término legal para atender las solicitudes de acceso a la información pública, en virtud de encontrarse en análisis de respuesta.

* + - 1. Folio 330026523001923
      2. Folio 330026523001950
      3. Folio 330026523001979
      4. Folio 330026523002009
      5. Folio 330026523002010
      6. Folio 330026523002011
      7. Folio 330026523002019
      8. Folio 330026523002021
      9. Folio 330026523002034
      10. Folio 330026523002035
      11. Folio 330026523002036
      12. Folio 330026523002038
      13. Folio 330026523002055
      14. Folio 330026523002057
      15. Folio 330026523002058
      16. Folio 330026523002060
      17. Folio 330026523002066
      18. Folio 330026523002068
      19. Folio 330026523002072
      20. Folio 330026523002078
      21. Folio 330026523002089
      22. Folio 330026523002116
      23. Folio 330026523002119

Las personas integrantes del Comité de Transparencia determinan autorizar la ampliación de plazo de respuesta de los folios citados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En consecuencia, se emite la siguiente resolución por unanimidad:

**VI.A.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la ampliación de plazo de respuesta para la atención de las solicitudes mencionadas, con fundamento en el artículo 135, segundo párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**VII. Análisis de versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**

**A.  Artículo 70, fracción XXXVI de la LGTAIP**

**A.1 Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (OIC-COFAA-IPN) VP 001623**

El Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, con la finalidad de dar cumplimiento a obligación de transparencia establecida en la fracción XXXVI del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita al Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública la clasificación por confidencialidad de datos personales contenidos en las siguientes resoluciones: II-0003/2021 y PS-0001/2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de Dato** | **Fundamento** | **Justificación** |
| Nombre de persona física | Artículos 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) | El nombre es un atributo de la personalidad, esto es la manifestación del derecho a la identidad y razón que por sí misma permite identificar a una persona física, dada su intervención en el expediente y la finalidad para la que fue obtenida esa información resulta necesario revelar la identidad para prevenir o evitar represalias o se materialice un daño, especialmente si existe vínculo o subordinación entre el investigado y este, por lo que su protección resulta necesaria |

El Comité de Transparencia resuelve por unanimidad:

**VII.A.1.ORD.20.23: CONFIRMAR** la clasificación por confidencialidad invocada por el Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional del dato personal “Nombre de persona física” que obran en los expedientes II-0003/2021 y PS-0001/2021, y por ende autoriza la elaboración de la versión pública, con fundamento en lo establecido por la fracción I del Artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**VIII. Asuntos Generales.**

No se tienen asuntos enlistados.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 12:10 horas del día 24 de mayo del 2023.

**Grethel Alejandra Pilgram Santos**

**DIRECTORA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA**

**Mtra. María de la Luz Padilla Díaz**

**DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS**

**L.C. Carlos Carrera Guerrero**

**TITULAR DE CONTROL INTERNO Y** **SUPLENTE DE LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2023.

Elaboró: Fermín Hildebrando García Leal, Secretario Técnico del Comité de Transparencia